

CONGRESO NACIONAL  
**CAMARA DE SENADORES**

SESIONES EXTRAORDINARIAS DE 1999

**ORDEN DEL DIA N° 1335**

Impreso el día 23 de diciembre de 1999

SUMARIO

**COMISION DE ASUNTOS PENALES Y REGIMENES  
CARCELARIOS, DE DROGADICCION  
Y NARCOTRAFICO, DE ECONOMIA  
Y DE PRESUPUESTO Y HACIENDA**

Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión (I); y en los de ley de los señores senadores Humada (II); y Berhongaray (m. c.) (III), estableciendo un régimen penal para el blanqueo de activos provenientes de ilícitos. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (C. D.-101/99 y S.-786 y 986/98.)

**Dictamen de comisión**

*Honorable Senado:*

Vuestras comisiones de Asuntos Penales y de Regímenes Carcelarios, de Drogadicción y Narcotráfico, de Economía y de Presupuesto y Hacienda, han considerado los proyectos de ley (C.D.-101/99), del senador Humada (S.-786/98) y del senador Berhongaray (986/98) los que establecen un régimen penal para el blanqueo de activos provenientes de ilícitos; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la sanción del siguiente

**PROYECTO DE LEY**

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

**CAPÍTULO I**

*Modificación del Código Penal*

Artículo 1º—Incorpórase como artículo 278 bis del Código Penal el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 278 bis: Será reprimido con prisión de dos (2) a diez (10) años y multa del doble al quintuple del monto del valor de la suma de la

acción realizada, el que sin haber sido autor o participe de un delito, interviniera en la inversión, venta, pignoración, transferencia, transporte, transmisión o cualquier otro acto jurídico referido a cosas o bienes provenientes de aquél, con la intención de ocultar el origen ilícito de los mismos, siempre que el valor de lo ocultado sea superior a cincuenta mil pesos (\$ 50.000).

El mínimo de la escala penal será de cinco (5) años de prisión, cuando el monto de lo ocultado sea superior a doscientos mil pesos (\$ 200.000), o

cuando el autor realizare el hecho con habitualidad, o como miembro de una asociación ilícita, cuando sea funcionario público y actuare en el ejercicio de sus funciones.

Será castigado con la misma pena, el que habiendo sido autor o partícipe de un delito realizare los actos reprimidos en los párrafos anteriores.

## CAPÍTULO II

### *Unidad de Información Financiera*

Art. 2º.— Créase la Unidad de Información Financiera (UIF), como entidad dependiente del Banco Central de la República Argentina, la cual se regirá por las disposiciones de la presente ley.

Art. 3º.— La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de:

- a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737);
- b) Delitos de contrabando de armas (ley 22.415);
- c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal;
- d) Hechos ilícitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales;
- e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5 del Código Penal);
- f) Delitos contra la administración pública previstos en los capítulos VI, VII, IX y IX bis del título XI del libro segundo del Código Penal.

Art. 4º.— La Unidad de Información Financiera tendrá su domicilio en la Capital de la República y podrá establecer agencias regionales en el resto del país.

Art. 5º.— La Unidad de Información Financiera estará integrada por quince (15) miembros designados de la siguiente manera:

- a) Un funcionario del Banco Central de la República Argentina;
- b) Un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos;
- c) Un funcionario de la Comisión Nacional de Valores designado por el respectivo organismo;
- d) Un experto en temas relacionados con el lavado de activos designado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación.

Estos miembros deberán ser funcionarios de carrera con más de cuatro años de antigüedad y designados por concurso interno del organismo respectivo;

- e) Seis (6) representantes del Honorable Congreso de la Nación, tres (3) por el Honorable Senado

y tres (3) por la Honorable Cámara de Diputados, dos (2) por la primera minoría y uno (1) por la segunda minoría de cada una de las Cámaras;

- f) Cinco (5) expertos financieros, penalistas, criminólogos u otros profesionales con incumbencias relativas al objeto de esta ley. La selección de estos profesionales se realizará mediante concurso público de oposición y antecedentes.

Art. 6º.— La selección de los expertos financieros se ajustará a las siguientes directivas:

- a) Los postulantes serán seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes, convocado por el Banco Central, publicándose las fechas de exámenes y condiciones generales de los mismos, por cinco días en el Boletín Oficial, dos diarios de alcance nacional y un diario de cada provincia;
- b) Previamente se determinarán los criterios y mecanismos de evaluación, y los antecedentes que serán computables;
- c) Los nombres de aquellos que aprueben los exámenes que evaluarán tanto la formación teórica como práctica, serán publicados por cinco días en los mismos medios especificados en el inciso a), quedando por el término de 60 días corridos luego de la última publicación, sujetos a las impugnaciones que pudieran realizarle cualquier ciudadano, grupo de ciudadanos, entidades intermedias o persona jurídica.

Las impugnaciones deberán presentarse ante el Banco Central, las cuales serán remitidas para conocimiento de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Drogadicción y Narcotráfico del Honorable Congreso de la Nación.

Art. 7º.— Los miembros de la Unidad de Información Financiera tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, alcanzándose las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos, no pudiendo ejercer durante los dos (2) años posteriores a su desvinculación de la Unidad de Información Financiera las actividades que la reglamentación precise en cada caso ni tampoco tener interés en ellas.

Durarán cuatro (4) años en sus cargos, el que podrá ser renovado en forma indefinida y percibirán una remuneración equivalente a la de un juez de cámara de la Justicia nacional.

Podrán ser removidos de sus cargos por el voto de las dos terceras partes de los miembros totales del cuerpo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones, mediante un procedimiento que asegure el derecho de defensa. Lo resuelto podrá ser recurrible mediante recurso de reposición y jerárquico ante el directorio del Banco Central.

Art. 8º.— Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera se requerirá:

1. Poseer título universitario de grado, preferentemente en derecho, o en disciplinas relaciona-

das con las ciencias económicas o con las ciencias informáticas.

2. Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia.
3. No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido durante el año precedente a su designación las actividades que la reglamentación precise en cada caso, ni tampoco tener interés en ellas.

Art. 9º.—La Unidad de Información Financiera contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de Justicia, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico, el Banco Central de la República Argentina, Administración Federal de Ingresos Públicos, la Inspección General de Justicia, los registros públicos de comercio o entes análogos de las provincias, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La Unidad de Información Financiera podrá solicitar a otros titulares de organismos de la administración pública nacional o provincial la designación de oficiales de enlace cuando lo crea conveniente.

La función de estos oficiales de enlace será la consulta y coordinación de actividades de la Unidad de Información Financiera con las de los organismos de origen a los que pertenecen.

Art. 10.—Es competencia de la Unidad de Información Financiera:

1. Recibir, solicitar, procesar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 17 de la presente ley.
2. Colaborar durante la sustanciación del proceso con los órganos judiciales y del Ministerio Público en la persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley.
3. En todos los casos en que se encuentre en trámite una denuncia o actuación ante el Poder Judicial que verse sobre los mismos hechos, personas o actos que se encuentren a estudio en la Unidad de Información Financiera, tendrá prioridad y exclusividad en la investigación de dichas actuaciones la Justicia, debiendo aquélla poner a su disposición todos los elementos que obren en su poder sobre el caso dentro de las 48 horas de tomado conocimiento por cualquier medio que fuere, de la causa judicial. La falta a esta obligación de los miembros de la Unidad de Información Financiera, será causal de remoción prevista en el artículo 7º de la presente ley.
4. Dictar su reglamento interno, para lo cual se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros.

Art. 11.—La Unidad de Información Financiera estará facultada para:

1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil para el

cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.

En los casos en que a la Unidad de Información Financiera le sean opuestas disposiciones que establezcan el secreto de las informaciones solicitadas, podrá requerir en cada caso autorización al juez competente del lugar donde deba ser suministrada la información o del domicilio de la Unidad de Información Financiera a opción de la misma.

2. Recibir declaraciones voluntarias.
3. Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que están obligados a prestarla en los términos de los artículos 398 y 399 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
4. Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley.
5. Solicitar al juez competente la suspensión, por el plazo que éste determine, de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente conforme al inciso b) del artículo 18 o cualquier otro acto vinculado a éstos, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el artículo 3º de la presente ley. La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo.
6. Solicitar al juez competente el allanamiento de lugares públicos o privados, la requisita personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación. Solicitar al Ministerio Público que arbitre todos los medios legales necesarios para la obtención de información de cualquier fuente u origen.
7. Disponer la implementación de sistemas de control interno para las personas a que se refiere el artículo 17, en los casos y modalidades que la reglamentación determine.
8. Aplicar las sanciones previstas en el capítulo IV de la presente ley, debiendo garantizarse el debido proceso.
9. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia Unidad de Información Financiera o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter, a condición de necesaria y efectiva reciprocidad;

10. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control.

Art. 12. — La Unidad de Información Financiera estará sujeta a las siguientes obligaciones:

1. Presentar una rendición semestral de su gestión al Honorable Congreso de la Nación. Este informe deberá contener un capítulo general con la nómina de todas las denuncias e investigaciones en trámite, y un capítulo especial con un detalle exhaustivo de cada uno de los trámites. Los informes particulares de cada trámite, deberán contener como mínimo: Fecha de iniciación, denunciante, denunciado, objeto de la denuncia, medidas de prueba solicitadas, pruebas ordenadas, la resolución adoptada por la Unidad de Información Financiera, tribunal y fiscal actuantes una vez concluido el proceso.
2. Comparecer ante las comisiones del Honorable Congreso de la Nación todas las veces que éstas lo requieran y emitir los informes, dictámenes y asesoramiento que éstas le soliciten.
3. Conformar el Registro Único de Información con las bases de datos de los organismos obligados a suministrarlas y con la información que por su actividad reciba.

Art. 13. — La Unidad de Información Financiera se reunirá en sesiones plenarias al menos cuatro veces al mes en la forma que establezca el reglamento interno. El quórum para sesionar será de ocho (8) miembros y adoptará las decisiones por mayoría de cinco (5) miembros de los miembros presentes.

Art. 14. — La Unidad de Información Financiera recibirá información, manteniendo en secreto la identidad de los obligados a informar. El secreto sobre su identidad cesará cuando se formule denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

Los sujetos de derecho ajenos al sector público y no comprendidos en la obligación de informar contemplada en el artículo 17 de esta ley podrán formular denuncias ante la Unidad de Información Financiera.

Art. 15. — El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie.

Art. 16. — En los casos en que el procesamiento de las informaciones permitir inferir la probable comisión del tipo penal del artículo 278 bis, deberá efectuar la denuncia al Ministerio Público por resolución fundada, poniendo a su disposición los elementos de convicción colectados.

Corresponderá el archivo definitivo y destrucción de todas las actuaciones y registros de cualquier denuncia, investigación o actuación, si transcurriera un año contado desde la fecha de inicio sin que se haya dictado resolución definitiva por parte de la unidad.

## CAPÍTULO III

### *Deber de informar. Sujetos obligados*

Art. 17. — Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, en los términos del artículo 18 de la presente ley:

1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias; y las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones.
2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional.
3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar.
4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos.
5. Los agentes intermediarios inscritos en los mercados, de futuros y opciones cualquiera sea su objeto.
6. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.
7. Las empresas aseguradoras.
8. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.
9. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.
10. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.
11. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315.
12. Las personas físicas o jurídicas inscritas en los registros establecidos por el artículo 23, inciso t), del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias).
13. Los organismos de la administración pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argen-

tina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia.

No serán aplicables ni podrán ser invocados por los sujetos obligados a informar por la presente ley las disposiciones legales referentes al secreto bancario, fiscal o profesional, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por la ley o por contrato cuando el requerimiento de información sea formulado por el juez competente del lugar donde la información deba ser suministrada o del domicilio de la Unidad de Información Financiera a opción de ésta, o por cualquier tribunal competente con fundamento en esta ley.

Art. 18. — Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las siguientes obligaciones:

- a) Recabar de sus clientes o requirientes, documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto. Sin embargo, podrá obviarse esta obligación cuando los importes sean inferiores al mínimo que establezca la circular respectiva.

Cuando los clientes o requirientes actúen en representación de terceros, se deberán tomar todos los recaudos necesarios a efectos de que se identifique la identidad de la persona por quienes actúen.

Toda esta información deberá archivar-se por el término y según las formas que la Unidad de Información Financiera establezca;

- b) Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma. A los efectos de la presente ley se consideran operaciones sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, así como también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada.

La Unidad de Información Financiera establecerá las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de esta obligación para cada categoría de obligado y tipo de actividad;

- c) Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley.

Art. 19. — Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia

desarrolladas en su consecuencia. El mismo deber de guardar secreto rige para las personas y entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información Financiera.

El funcionario o empleado de la Unidad de Información Financiera, así como también las personas que por sí o por otro revelen las informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información Financiera, serán, reprimidos con prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

#### CAPÍTULO IV

##### *Régimen penal administrativo*

Art. 20. —

1. Será sancionada con multa de dos (2) a 10 (diez) veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la posibilidad de atribuirles la apariencia de un origen lícito, en el sentido del artículo 278 bis del Código Penal. El delito se considerará configurado cuando haya sido superado el límite de valor establecido por esa disposición, aun cuando los diversos hechos particulares, vinculados entre sí, que en conjunto hubieran excedido de ese límite hubiesen sido cometidos por personas físicas diferentes, sin acuerdo previo entre ellas, y que por tal razón no pudieran ser sometidas a enjuiciamiento penal.
2. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica, hubiera cometido en ese carácter el delito a que se refiere el artículo 19 de esta ley, la persona jurídica sufrirá multa de diez mil pesos (\$ 10.000) a cien mil pesos (100.000).

Art. 21. —

1. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones de información ante la Unidad de Información Financiera creada por esta ley será sancionada con pena de multa de una (1) a diez (10) veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave.
2. La misma sanción sufrirá la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor.
3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa será de diez mil pesos (\$ 10.000) a cien mil pesos (\$ 100.000).

Art. 22. — Las resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en este capítulo serán recurribles por ante la justicia en el fuero contencioso

administrativo, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la ley 19.549 de procedimientos administrativos.

Art. 23. — Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del proceso administrativo a que dieran lugar las infracciones previstas en esta ley se regirán por los artículos 1.101 y siguientes y 3.982 bis del Código Civil, entendiéndose por "acción civil", la acción "penal administrativa".

Art. 24. — Para el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera deberá preverse la partida presupuestaria correspondiente.

En todos los casos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados a una cuenta especial del Tesoro nacional. Dichos fondos serán afectados a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera, los programas previstos en el artículo 39 de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, los de salud y capacitación laboral, conforme lo establezca la reglamentación pertinente.

El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley, serán entregados por el tribunal interviniente a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo nacional.

Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución judicial firme.

## CAPÍTULO V

### *El Ministerio Público Fiscal*

Art. 25. — Cuando corresponda la competencia federal o nacional el fiscal general designado por la Procuración General de la Nación recibirá las denuncias sobre la posible comisión de los delitos de acción pública previstos en esta ley para su tratamiento de conformidad con las leyes procesales y los reglamentos del Ministerio Público Fiscal; en los restantes casos de igual modo actuarán los funcionarios del Ministerio Fiscal que corresponda.

Los miembros del Ministerio Público Fiscal investigarán las actividades denunciadas o requerirán la actividad jurisdiccional pertinente conforme a las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación y la Ley Orgánica del Ministerio Público, o en su caso, el de la provincia respectiva.

## CAPÍTULO VI

### *Disposiciones generales*

Art. 26. — En caso de actividades relacionadas con la producción, tráfico y comercialización ilícita de estu-

pefacientes y precursores químicos, se aplicarán las previsiones de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, en cuanto fueran compatibles.

Art. 27. — Derógase el artículo 25 de la ley 23.737 (texto ordenado).

Art. 28. — Comuníquese el Poder Ejecutivo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 21 de diciembre de 1999.

*Angel F. Pardo. — Julio C. Humada. — Carlos A. Verna. — Augusto Alasino. — Ernesto R. Oudín. — Emilio M. Cantarero. — Antonio F. Cafiero. — Tomás R. Pruyas. — Horacio A. Zalazar. — Enrique M. Martínez Almudevar. — Daniel Baum. — Jorge F. Mikkelsen-Löth. — Daniel A. Varizat. — Osvaldo R. Sala. — Jorge J. Masset. — Alberto M. Tell. — Omar M. Vaquir.*

En disidencia parcial:

*Alcides H. López. — José L. Gioja. — Jorge R. Yoma. — Ricardo A. Branda. — Héctor M. Maza.*

## FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

Señor presidente:

El lavado de dinero, es decir, la conversión de dinero ilegítimo en activos —monetarios o no— con apariencia legal, no es un fenómeno nuevo; por el contrario, es tan viejo como el delito mismo. Cada vez que se rompe la ley en procura de un beneficio económico o que lo tiene como resultado del injusto, ha surgido la necesidad de que el delincuente disponga de dicho producto en forma de que no le atraiga la sanción por el delito cometido.

Tradicionalmente la figura del encubrimiento sancionaba la conducta de aquellos que, sin haber tomado parte en el ilícito y sin siquiera haberlo prometido, ayudaban al delincuente a aprovechar el fruto de su acción o eludir las consecuencias de sus actos.

En los últimos años esta actividad encubridora alcanzó una especial dimensión en el marco internacional, en el regional y en el nacional, debido, fundamentalmente, a su relación con las drogas. El crecimiento del consumo, el surgimiento del narcotráfico como su natural consecuencia, el incremento en los niveles de violencia como consecuencia de la drogadicción, la generación de ingentes recursos monetarios y la internacionalización del comercio de drogas, han transformado al lavado de dinero en una actividad delictiva de alcances globales y en la que se hallan comprometidas las sociedades modernas casi sin excepción.

Esa realidad se ha convertido no sólo en un problema de criminalidad creciente, sino en una amenaza a los sistemas políticos en punto a su estabilidad, confiabilidad, honestidad, transparencia y efectividad.

El narcotráfico es, por su naturaleza, un delito esencialmente internacional; la materia prima de la mayoría

de las drogas "naturales", con excepción de la marihuana que es casi universal, se produce sólo en ciertas zonas geográficas.

Uno de los principales problemas que debe enfrentar el narcotraficante, especialmente en los mercados consumidores, es de la disposición de dinero en efectivo, ya que la venta al consumidor final se realiza siempre en dinero en efectivo y en billete de baja denominación. A fin de facilitar el movimiento de estos fondos ilícitos se busca hacerlo ingresar al sistema financiero, a fin de transferirlos dentro de un país o fuera de él con seguridad o velocidad, y desde allí comenzar la segunda etapa del lavado, su alejamiento del origen espurio.

Finalmente, la delincuencia intentará invertir sus ganancias de forma tal que ellas tomen finalmente la apariencia de fondos legítimos y le aseguren la preservación del capital y, cuando sea posible, además, la generación de utilidades. Para facilitar la integración de estos fondos a las corrientes legítimas de inversión se buscará nuevamente el concurso de entidades financieras o de intermediación, por lo cual ellas presentan mayor vulnerabilidad.

Una postura consideró aplicable la figura típica del lavado de dinero sólo a los fondos originados en el tráfico de drogas; algunas organizaciones internacionales y una significativa cantidad de países la extendieron a ciertos crímenes considerados de especial significación, y otros lo aplicaron, si no a todos, a una cantidad de ilícitos.

Hoy en día la mayoría de los países dictaron normas para facilitar la detención de bienes y personas, embargos preventivos, la colaboración en investigaciones judiciales (intervenciones telefónicas y telegráficas, seguimiento de personas, etcétera).

Por ejemplo en los Estados Unidos de América, bastará que fondos provenientes de cualquier delito y que pasen aunque sea por una milésima de segundos por una transferencia electrónica de fondos, para que sea suficiente para iniciar proceso.

En el marco regional, la Argentina, Chile y Brasil se han ido convirtiendo en piezas claves para el transporte de drogas y lavado de dinero, ello debido a que tres de los miembros del Mercosur son limítrofes con Perú y Bolivia, productores de droga.

Uruguay: su legislación represiva abarca desde el uso ilícito de estupefacientes a figuras delictivas económicas y financieras del delito, por ejemplo: lavado de dinero, ocultamiento de bienes provenientes de ilícitos.

Cabe destacar que Uruguay se ha apartado de la política internacional, no crea una comisión especial destinada al control y aplicación de su legislación, facultada al Banco Central, con lo que se evitan superposiciones innecesarias.

Brasil: crea la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes, dependiente de la Presidencia de la Nación, con todas las facultades que corre.

Argentina: el lavado de dinero se halla tipificado en el artículo 25 de la ley 23.737 de 1989, la acción típica consiste en intervenir en la inversión, venta, pignoración, transferencia o cesión de las ganancias, cosas o bienes provenientes de aquéllos, o del beneficio económico obtenido del delito.

A diferencia de la ley paraguaya, que se refiere al dolo y la culpa; la brasileña, que no hace referencia alguna; la uruguaya, que sólo se refiere a la conducta dolosa; la ley argentina contempla la comisión en forma de dolo directo o eventual.

Por medio de este dictamen se crea la Unidad de Información Financiera, dependiente del Banco Central de la República Argentina, que será la encargada del análisis, tratamiento y la transmisión de la información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de ilícitos. Los gastos de funcionamiento se obtendrán de las multas que recabe y los bienes que se decomisen.

Se ha resuelto dejar esta unidad bajo la dependencia del Banco Central, pues éste es un organismo altamente especializado, responsable máximo de la política monetaria y financiera y controlador natural del sistema financiero y cambiario institucional. De esta forma se evitan superposiciones de funciones, excesos burocrático, futuras competitividades e interpretaciones disímiles que por lo general terminan afectando la eficacia de la norma.

Esta Unidad Financiera tendrá la obligación de rendir anualmente de su gestión y toda vez que así se lo requiera al Honorable Congreso de la Nación.

Respecto de la integración de esta unidad se cree conveniente incorporar a representantes del Parlamento, los cuales tendrán la obligación de informar a ambos cuerpos sobre las actuaciones de la comisión, respetándose la representación política de cada uno de los cuerpos legislativos.

Con relación al proyecto de Diputados, específicamente con los sujetos obligados a informar, surgen algunas objeciones. Al establecer el listado de personas obligadas en el inciso 2º del artículo 20, especifica a las personas físicas y jurídicas que "a título personal o como actividad habitual, operen en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques...". Esto es un error pues nadie puede dedicarse con habitualidad a tal actividad sin ser previamente autorizado por el Banco Central de la República Argentina, en calidad de entidad financiera, casa, agencia, oficina o corredor de cambio. Quien así lo hiciere estaría comprendido en la infracción definida en el artículo 1º de la ley 19.357 (régimen penal cambiario).

Asimismo consideramos erróneo incorporar a personas físicas o entidades que, por la particularidad de su desempeño no necesariamente pueden apreciar los elementos objetivos que hagan despertar las sospechas en los términos que la ley señala. En particular merecen la objeción aludida, los registros públicos, los escribanos, los contadores públicos o los productores de seguro. Incluirlos en los sujetos obligados los colocaría en una situación de alto riesgo, ya que deberán implementar complejos sistemas de detección y prevención, para el caso de los registros públicos, o limitar sensiblemente su actuación, por ejemplo, escribanos y contadores.

El proyecto de Diputados, merece las siguientes observaciones:

a) El título de "encubrimiento y lavado de activos y origen delictivo" afecta gravemente la figura del encu-

brimiento, en razón que este delito es un tipo autónomo general, no vinculado a delito alguno, y el proyecto al sugerir el título aludido vincula el encubrimiento al lavado de activos;

b) El tipo penal del lavado de dinero proyectado como artículo 278, inciso 1 a), adolece de una notable imprecisión que consiste en lo siguiente: describe las conductas sancionadas agregando a continuación como exigencia de tipicidad "...la consecuencia posible de que los bienes originarios... adquieran, la apariencia...". Este fragmento "consecuencia posible" introduce una notable ambigüedad al tipo penal, haciendo que el mismo sea violatorio de la regla de legalidad constitucional (Constitución Nacional, artículo 18), que obliga a que las descripciones penales tengan rigor;

c) En el artículo 277, inciso 2 a) se produce otra grave afectación del principio de legalidad, cuando se introduce un agravante que consiste en "un delito especialmente grave". De manera inevitable surge el interrogante ¿qué es "un delito especialmente grave"?

d) El artículo 278, inciso 2, introduce un tipo culposo, que merece a su vez dos objeciones;

1 Desde el punto de vista de la técnica legislativa en materia penal, no es correcto incluir dentro de un mismo artículo tipos dolosos y culposos. Por la considerable diferencia entre ellos, los mismos deben ser regulados mediante normas diferentes.

2 Y, en lo que hace a la redacción en sí misma del mencionado tipo culposo, el mismo merece esta crítica: deja de lado el criterio normativo que usa el Código Penal para sancionar comportamientos culposos, tal y como es sabido, la fórmula de los artículos 84, 94, etcétera, del texto punitivo, e introduce la expresión "temeridad", la que, sin duda alguna, carece de todo rigor técnico, generando así nueva ambigüedad en la ley penal; por otro lado se sancionan los casos de "imprudencia grave", lo que otra vez determina imprecisión, pues no sabemos qué es "imprudencia grave";

e) Desde el punto de vista político criminal, estimo que es altamente riesgoso sancionar comportamientos culposos en esta materia. Dado la complejidad de las tareas en campos financieros, contables, bancarios, impositivos, etcétera, resultante especialmente de la numerosa lista de normas jurídicas que reglamentan estos campos, estimo conveniente consagrar la atipicidad en materia culposa, pues de lo contrario cualquier infracción a los múltiples deberes llevará a responsabilidades penales;

f) Estimo de fundamental importancia definir con el mayor riesgo posible el tipo penal del lavado de activos ilegítimos, por dos razones decisivas:

Por razones de carácter constitucional, toda prohibición penal, so pena de ser declarada inconstitucional, debe describir, con precisión la conducta prohibida.

Cuando la ley penal no cumple tal exigencia la aplicación de la ley, en campo jurisprudencial se torna contradictoria; lo que es altamente negativo desde el punto de vista político criminal.

Ante el conjunto de observaciones formuladas precedentemente, se estima conveniente por esta Comisión de Legislación Penal del Honorable Senado de la Nación, y dado la urgencia de la ley proyectada, producir las siguientes modificaciones al proyecto de la Cámara de Diputados, en lo referido a disposiciones de carácter penal.

En base a este criterio, se considera conveniente:

- Mantener la actual redacción del artículo 277.
- Mantener la actual redacción del artículo 278.
- Introducir el artículo 278 bis, tipo éste que castigará el blanqueo de activos provenientes de ilícitos.

Todo ello por las siguientes razones:

A) En primer lugar, es necesario consignar de manera especial que las leyes penales deben cumplir ciertas exigencias básicas de tipo constitucional propias de un estado de derecho.

Tales exigencias demandan, como mínimo, que se respete la regla de la legalidad, que entre otras cosas impone, que la conducta sancionada esté delimitada con el debido rigor. El tipo penal propuesto describe con la debida precisión el comportamiento sancionado.

B) Es así que se postula un tipo penal que no está limitado exclusivamente al narcotráfico. Se opta por el criterio legislativo de sancionar el blanqueo de activos provenientes de otros —cualquier— delitos, terrorismo, venta de armas.

C) La idea es sancionar un tipo doloso, que sin caer en casuismo, que tenga una estructura suficiente para captar diversas formas de blanqueo de activos ilegítimos.

D) El mismo se construye como un tipo de los denominados en doctrina penal de "tendencia interna trascendente", cuya nota esencial consiste en que la figura sanciona un injusto que se consuma, no con el resultado de ocultar, sino con la realización de la acción que se lleva a cabo con esa finalidad sobre esta clase de tipos, en la doctrina nacional: Eugenio R. Zaffaroni, *Tratado de Derecho Penal*, Parte General, III, 372 y siguientes; en la doctrina alemana, Hans H. Jescheck, *tratado*, I, 436 y siguientes, traducción S. Mir Puig - F. Muñoz Conde.

Adviértase que el proyecto de Diputados consagra una figura que tiene como elemento al hecho que los bienes "adquieran, la apariencia de un origen legítimo..."; esta exigencia puede dar lugar a discusión sobre la consumación del delito. Con la fórmula propuesta del delito se consuma con la sola realización de la acción, con ese elemento subjetivo del tipo, por ejemplo la realización de una escritura traslativa de dominio, sin que sea necesario que los bienes "adquieran la apariencia de un origen legítimo, tal problema no se habrá de plantear, recordando que ésta es una técnica legislativa frecuente en el Código Penal, así, con tipo de tendencia interna trascendente, el artículo 80, inciso 7º ("...para preparar..."); artículo 127 bis ("...para que ejerzan la prostitución..."), artículo 142 bis ("...con el fin de obligar a la víctima..."),

artículo 145 ("...con el propósito de..."), artículo 189 bis ("...el que con el fin de..."), artículo 192 ("...tendiente a...") y así, 226 ("...para..." y "...con el fin de..."), etcétera.

E) Este es un delito que admite tentativa, pues los tipos de "tendencia interna trascendente" no presentan inconveniente en el tema, y en este caso las conductas castigadas son actos jurídicos, ventas, pignoración, etcétera, que mientras no hayan concluido, asumirán la forma del delito tentado.

F) Por otra parte, la fórmula propuesta, luego de narrar posibles actos típicos recurre a la expresión "o cualquier otro acto jurídico", con lo que se evita una enumeración casuística, con los sabidos inconvenientes que ello tiene, evitando así las posibles situaciones de atipicidad por defecto de técnica legislativa de conductas que merecen ser castigadas.

G) Se consagran formas agravadas del injusto en cuestión, en función del monto de lo que se oculta o pretende ocultar, habitualidad del autor, calidad de miembro de una asociación ilícita o por su calidad de funcionario público que delinque en el ejercicio de su función.

H) También se cubre un vacío legislativo al castigar la acción de quien ha cometido un delito anterior y el mismo realiza el acto de blanqueo de activo.

I) El proyecto no sanciona tipo culposos, por las siguientes razones, es sabido que el tipo culposos o imprudente sanciona una conducta que infringe un deber de cuidado, conforme opinión unánime de la doctrina penal actual. Es lo que se llama un tipo abierto.

El campo financiero, impositivo, comercial o ámbitos profesionales como el del escribano, etcétera, está regulado por un número de normas realmente enorme, muchas de las cuales son discutidas en cuanto a su exacto contenido, lo que significa que ante cualquier infracción se estará ante una imputación penal, cuyo contenido, como se dijo anteriormente, muchas veces no se sabe. Tanto es así, que en proyecto de Diputados, y a fin de evitar tal posible, o casi segura proliferación de causas penales, al regular el tipo culposos, usa el criterio de "imprudencia grave". Pero éste es un concepto muy ambiguo, pues es evidente que no se sabe qué es una imprudencia de tal modalidad. Dado las características del tipo culposos, en el sentido que es un "tipo abierto", en función de deberes de cuidado en materia penal el tipo culposos se sanciona en forma limitada o excepcional. Por tales razones se insiste, no es conveniente sancionar el tipo culposos.

Dado que se crea un nuevo tipo de blanqueo o lavado de activo de origen ilícito, que comprende no sólo a delitos de narcotráfico, sino a cualquier otro delito, corresponde derogar la norma sobre lavado que contiene la Ley de Estupefacientes (23.737), siendo aplicable la nueva disposición general.

Por las razones expuestas, es que aconsejo la aprobación del presente dictamen de comisión.

Angel F. Pardo. — Augusto Alasino. —  
Alberto M. Tell. — Ricardo A. Branda.

## ANTECEDENTES

### I

#### Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(1º de septiembre de 1999)

#### PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

#### REFORMA DEL DELITO DE ENCUBRIMIENTO Y CREACION DE UN SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DE DELITOS DE ESPECIAL GRAVEDAD

### CAPÍTULO I

#### Modificación del Código Penal

Artículo 1º — Sustitúyese la rúbrica del capítulo XII del título XI del libro segundo del Código Penal ("Encubrimiento"), por el de "Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo".

Art. 2º — Sustitúyese el artículo 277 del Código Penal, por el siguiente:

#### Artículo 277:

1. Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado:

- Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta;
- Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o participe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer;
- Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito;
- No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o participe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole;
- Asegurare o ayudare al autor o participe a asegurar el producto o provecho del delito.

2. La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo cuando:

- El hecho precedente fuera un delito especialmente grave siendo tal aquél cuya pena mínima fuera superior a tres (3) años de prisión;
- El autor actuare con ánimo de lucro;
- El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento.

La agravación de la escala penal prevista en este inciso sólo operará una vez, aun cuando concurrieren más de una de sus circunstancias calificantes. En este caso, el tribunal podrá tomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena.

3. Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. La exención no rige respecto de los casos del inciso 1, e), y del inciso 2, b).

Art. 3º — Sustitúyese el artículo 278 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 278:

1. a) Será reprimido con prisión de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos (\$ 50.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí;
  - b) El mínimo de la escala penal será de cinco (5) años de prisión, cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza;
  - c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso, letra a, el autor será reprimido, en su caso, conforme a las reglas del artículo 277.
2. El que por temeridad o imprudencia grave cometiere alguno de los hechos descritos en el inciso anterior, primera oración, será reprimido con multa del veinte por ciento (20 %) al ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor de los bienes objeto del delito.
3. El que recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo, con el fin de hacerlos aplicar en una operación que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido conforme a las reglas del artículo 277.
4. Los objetos a los que se refiere el delito de los incisos 1, 2 o 3 de este artículo podrán ser decomisados.

Art. 4º — Sustitúyese el artículo 279 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 279:

1. Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito precedente.
2. Si el delito precedente no estuviere amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de mil pesos (\$ 1.000) a veinte mil pesos (\$ 20.000) o la escala penal del delito precedente, si ésta fuera menor. No será punible el encubrimiento de un delito de esa índole, cuando se cometiere por imprudencia, en el sentido del artículo 278, inciso 2.
3. Cuando el autor de alguno de los hechos descritos en el artículo 277, incisos 1 o 2, en el artículo 278, inciso 1, fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones sufrirá además inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que requirieran inhabilitación especial. En el caso del artículo 278, inciso 2, la pena será de uno (1) a cinco (5) años de inhabilitación.
4. Las disposiciones de este capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación especial de este Código, en tanto el hecho precedente también hubiera estado amenazado con pena en el lugar de su comisión.

CAPÍTULO II

*Unidad de Información Financiera*

Art. 5º — Créase la Unidad de Información Financiera (UIF) como entidad autárquica del Estado nacional regida por las disposiciones de la presente ley.

Art. 6º — La Unidad de Información Financiera gozará de total autonomía funcional y será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de:

- a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737);
- b) Delitos de contrabando de armas (ley 22.415);
- c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal;
- d) Hechos ilícitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales;

- e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5 del Código Penal);
- f) Delitos contra la administración pública previstos en los capítulos VI, VII, IX y IX bis del título 11 del libro segundo del Código Penal.

Art. 7º.—La Unidad de Información Financiera tendrá su domicilio en la Capital de la República y podrá establecer agencias regionales en el resto del país.

Art. 8º.—La Unidad de Información Financiera estará integrada por nueve miembros designados de la siguiente manera:

- a) Un funcionario del Banco Central de la República Argentina;
- b) Un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos;
- c) Un funcionario de la Comisión Nacional de Valores designados por el respectivo organismo; y
- d) Un experto en temas relacionados con el lavado de activos designados por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación. Estos miembros deberán ser funcionarios de carrera con más de cuatro (4) años de antigüedad y designados por concurso interno del organismo respectivo.

Cinco (5) expertos financieros seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes por una comisión ad hoc integrada en la siguiente forma:

- Dos miembros del Consejo de la Magistratura elegidos por sus pares, con una mayoría de dos tercios.
- Dos funcionarios del Ministerio Público elegidos por el procurador general de la Nación.
- Un miembro del directorio del Banco Central elegido por sus pares, con una mayoría de dos tercios.
- Un miembro designado por el ministro de Justicia.
- Un miembro designado por la Comisión Nacional de Valores.
- Un miembro designado por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Art. 9º.—La selección de los expertos financieros se ajustará a las siguientes directivas:

- a) Los postulantes serán seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes. La comisión ad hoc convocará a concurso dando a publicidad las fechas de exámenes;
- b) Previamente se determinarán los criterios y mecanismos de evaluación, y los antecedentes que serán computables.

La prueba de oposición procurará evaluar tanto la formación teórica como la práctica.

La comisión ad hoc realizará la preselección de los postulantes a integrar la Unidad de Información Financiera a los efectos de preparar una nómina de aquellos que acrediten idoneidad suficiente para presentarse al concurso público de oposición y antecedentes.

Art. 10.—Los miembros de la Unidad de Información Financiera tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos, no pudiendo ejercer durante los dos (2) años posteriores a su desvinculación de la Unidad de Información Financiera las actividades que la reglamentación precise en cada caso ni tampoco tener interés en ellas.

Durarán cuatro (4) años en sus cargos, el que podrá ser renovado en forma indefinida y percibirán una remuneración equivalente a la de un juez de cámara de la justicia nacional.

Podrán ser removidos de sus cargos por el voto de las dos terceras partes de los miembros totales del cuerpo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones, mediante un procedimiento que asegure el derecho de defensa.

Art. 11.—Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera se requerirá:

1. Poseer título universitario de grado, preferentemente en derecho o en disciplinas relacionadas con las ciencias económicas o con las ciencias informáticas.
2. Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia.
3. No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido durante el año precedente a su designación las actividades que la reglamentación precise en cada caso, ni tampoco tener interés en ellas.

Art. 12.—La Unidad de Información Financiera contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de Justicia, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico, el Banco Central de la República Argentina, la Dirección General Impositiva, la Administración de Aduanas, la Inspección General de Justicia, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La Unidad de Información Financiera podrá solicitar a otros titulares de organismos de la administración pública nacional la designación de oficiales de enlace cuando lo crea conveniente.

La función de estos oficiales de enlace será la consulta y coordinación de actividades de la Unidad de Información Financiera con las de los organismos de origen a los que pertenecen.

Art. 13.—Es competencia de la Unidad de Información Financiera:

1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 21 de la presente ley.

2. Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar legitimación de activos provenientes de los ilícitos previstos en el artículo 6º de la presente ley y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público, para el ejercicio de las acciones pertinentes.
3. Colaboran con los órganos judiciales y del Ministerio Público (para el ejercicio de las acciones pertinentes) en la persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley.
4. Dictar su reglamento interno para lo cual se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros.

Art. 14. — La Unidad de Información Financiera estará facultada para:

1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.

En los casos en que a la Unidad de Información Financiera le sean opuestas disposiciones que establezcan el secreto de las informaciones solicitadas, podrá requerir en cada caso autorización al juez competente del lugar donde deba ser suministrada la información o del domicilio de la Unidad de Información Financiera a opción de la misma.

2. Recibir declaraciones voluntarias.
3. Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que están obligados a prestarla.
4. Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley.
5. Solicitar al juez competente la suspensión, por el plazo que éste determine, de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente conforme al inciso b) del artículo 21 o cualquier otro acto vinculado a éstos, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el artículo 6º de la presente ley. La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo.
6. Solicitar al juez competente el allanamiento de lugares públicos o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación. Solicitar al Ministerio Público arbitre todos los medios legales necesarios para la obtención de información de cualquier fuente u origen.

7. Disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas a que se refiere el artículo 20, en los casos y modalidades que la reglamentación determine.
8. Aplicar las sanciones previstas en el capítulo IV de la presente ley, debiendo garantizarse el debido proceso.
9. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia Unidad de Información Financiera o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter, a condición de necesaria y efectiva reciprocidad.
10. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control.

Art. 15. — La Unidad de Información Financiera estará sujeta a las siguientes obligaciones:

1. Presentar una rendición anual de su gestión al Honorable Congreso de la Nación. A su vez deberá comparecer ante las comisiones competentes, al menos una vez durante el período ordinario, a los efectos de informar sobre la marcha de sus actividades.
2. Conformar un registro único de información con las bases de datos de los organismos obligados a suministrarlas y con la información que por su actividad reciba.

Art. 16. — La Unidad de Información Financiera se reunirá en sesiones plenarias al menos cuatro veces al mes en la forma que establezca el reglamento interno. El quórum para sesionar será de cinco miembros y adoptará las decisiones por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo cuando esta ley prevea una mayoría especial.

Art. 17. — La Unidad de Información Financiera recibirá información, manteniendo en secreto la identidad de los obligados a informar que la suministren. El secreto sobre su identidad cesará cuando se formule denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

Los sujetos de derecho ajenos al sector público y no comprendidos en la obligación de informar contemplada en el artículo 21 de esta ley podrán formular denuncias ante la Unidad de Información Financiera.

Art. 18. — El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie.

Art. 19. — Cuando de las informaciones aportadas o de los análisis realizados por la Unidad de Información Financiera, surgieron elementos de convicción suficientes para sospechar que se ha cometido uno de los de-

litos previstos en la presente ley, será comunicado de inmediato al Ministerio Público para que ejerza la acción penal.

### CAPÍTULO III

#### *Deber de informar. Sujetos obligados*

Art. 20. — Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, en los términos del artículo 21 de la presente ley.

1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias; y las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones.
2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas que a título profesional o como actividad habitual, operen en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjeta de crédito o pago; o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional.
3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar.
4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos.
5. Los agentes intermediarios inscritos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto.
6. Los registros públicos de comercio y los organismos administrativos de fiscalización y control de personas jurídicas; los registros de la propiedad inmueble, los registros nacionales del automotor y los registros prendarios.
7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.
8. Las empresas aseguradoras.
9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.
10. Los escribanos matriculados.
11. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.
12. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.
13. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315.

14. Las personas físicas o jurídicas inscritas en los registros establecidos por el artículo 23 inciso t) del Código Aduanero (ley 22.411) y modificatorias.
15. Los productores asesores de seguros, agentes intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades están regidas por las leyes 20.091, 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias.
16. Los profesionales matriculados cuya actividad esté regulada por los consejos profesionales de ciencias económicas, excepto cuando actúen en defensa en juicio.
17. Los organismos de la administración pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia.

No serán aplicables ni podrán ser invocados por los sujetos obligados a informar por la presente ley las disposiciones legales referentes al secreto bancario, fiscal o profesional, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por la ley o por contrato cuando el requerimiento de información sea formulado por el juez competente del lugar donde la información deba ser suministrada o del domicilio de la unidad de información financiera a opción de ésta, o por cualquier tribunal competente con fundamento en esta ley.

Art. 21. — Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las siguientes obligaciones:

- a) Recabar de sus clientes o requirientes, documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto. Sin embargo, podrá obviarse esta obligación cuando los importes sean inferiores al mínimo que establezca la circular respectiva.  
Cuando los clientes o requirientes actúen en representación de terceros, se deberán tomar todos los recaudos necesarios a efectos de que se identifique la identidad de la persona o personas por quienes actúen.  
Toda esta información deberá archivarla por el término y según las formas que la Unidad de Información Financiera establezca;
- b) Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma. A los efectos de la presente ley se considerarán operaciones sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas

obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada.

La Unidad de Información Financiera establecerá las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de esta obligación para cada categoría de obligado y tipo de actividad;

- c) Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley.

Art. 22. — Los funcionarios y empleados de la unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia. El mismo deber de guardar secreto rige para las personas y entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información.

El funcionario o empleado de la Unidad de Información Financiera, así como también las personas que por sí o por otro revelen las informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información Financiera, serán reprimidos con prisión de seis (6) meses a tres (3) años. El máximo de la escala penal será de seis (6) años, si la infidencia perjudicare manifiestamente el desarrollo de la investigación.

## CAPÍTULO IV

### *Régimen penal administrativo*

Art. 23. —

1. Será sancionada con multa de dos (2) a diez (10) veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la consecuencia posible de atribuirles la apariencia de un origen lícito, en el sentido del artículo 278, inciso 1) del Código Penal. El delito se considerará configurado cuando haya sido superado el límite de valor establecido por esa disposición, aun cuando los diversos hechos particulares, vinculados entre sí, que en conjunto hubieran excedido de ese límite hubiesen sido cometidos por personas físicas diferentes, sin acuerdo previo entre ellas, y que por tal razón no pudieran ser sometidas a enjuiciamiento penal.
2. Cuando el mismo hecho hubiera sido cometido por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o por varios órganos o ejecutores suyos en el sentido del artículo 278, inciso 2) del Código Penal, la multa a la persona jurídica será del veinte por ciento (20 %) al sesenta por ciento (60 %) del valor de los bienes objeto del delito.
3. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica hubiera cometido en ese carácter el

delito a que se refiere el artículo 22 de esta ley, la persona jurídica sufrirá multa de diez mil pesos (\$ 10.000) a cien mil pesos (\$ 100.000).

Art. 24. —

1. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible incumpla alguna de las obligaciones de información ante la Unidad de Información Financiera creada por esta ley será sancionada con pena de multa de una a diez veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave.
2. La misma sanción sufrirá la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto personalmente infractor.
3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa será de diez mil pesos (\$ 10.000) a cien mil pesos (\$ 100.000).

Art. 25. — Las resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en este capítulo serán recurribles por ante la Justicia en el fuero contencioso administrativo, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la ley 19.549 de procedimientos administrativos y sus modificatorias y decretos reglamentarios.

Art. 26. — Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del proceso administrativo a que dieran lugar las infracciones previstas en esta ley se regirán por los artículos 1.101 y siguientes y 3.982 bis del Código Civil, entendiéndose por "acción civil", la acción "penal-administrativa".

Art. 27. — Para el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera deberá preverse la partida presupuestaria correspondiente.

En todos los casos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados a una cuenta especial del Tesoro nacional. Dichos fondos serán afectados a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera, los programas previstos en el artículo 39 de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, los de salud y capacitación laboral, conforme lo establezca la reglamentación pertinente.

El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley, serán entregados por el tribunal interviniente a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo nacional.

Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución judicial firme.

## CAPÍTULO V

### *El Ministerio Público Fiscal*

Art. 28. — Cuando corresponda la competencia federal o nacional el fiscal general designado por la Procuración General de la Nación recibirá las denuncias sobre la posible comisión de los delitos de acción pública previstos en esta ley para su tratamiento de conformidad con las leyes procesales y los reglamentos del Ministerio Público Fiscal; en los restantes casos de igual modo actuarán los funcionarios de Ministerio Fiscal que corresponda.

Los miembros del Ministerio Público Fiscal investigarán las actividades denunciadas o requerirán la actividad jurisdiccional pertinente conforme a las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación y la Ley Orgánica de Ministerio Público, o en su caso, el de la provincia respectiva.

## CAPÍTULO VI

### *Disposiciones generales*

Art. 29. — En caso de actividades relacionadas con la producción, tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes y precursores químicos, se aplicarán las previsiones de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, en cuanto fueran compatibles.

Art. 30. — Deróganse el artículo 25 de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, la ley 24.450 y el decreto 1.849/90, y el decreto 1.426/96, anexo.

Art. 31. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIERRI.  
*Juan Estrada.*

## II

### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

Artículo 1º.— Modifícase el artículo 25 de la ley 23.737, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 25: Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de hasta diez veces el monto o valor comprometido, el que sin haber tomado parte ni cooperado en la ejecución de los hechos previstos en esta ley, interviniera en la inversión, venta, pignoración, transferencia, transporte, transmisión o cesión de las ganancias, cosas o bienes provenientes de aquellos, de los que hubieren sustituido o del beneficio económico obtenido del delito, conociendo ese origen.

Con la misma pena será reprimido el que comprare, guardare, receptare, u ocultare, escondiere o disimulase la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad o control de dichas ganancias, cosas, bienes o beneficios conociendo su origen.

La pena de prisión será de uno a cinco años y la multa de hasta cinco veces el monto de los bienes

comprometidos cuando el origen ilícito hubiera debido presumirse de las circunstancias de hecho arriadas a la causa o de la calidad personal de las personas involucradas.

A los fines de la aplicación de este artículo no importa que el hecho originante de las ganancias, cosas, bienes o beneficios se haya producido en territorio extranjero.

Art. 2º — Incorpórase a la ley 23.737 como artículo 25 bis, el siguiente:

Artículo 25 bis: Cuando el hecho hubiere sido ejecutado por directores, representantes legales, apoderados, gerentes o quienes cumplieren funciones equiparables en una persona de existencia ideal con los medios o recursos facilitados por la misma de manera que el hecho resultare cometido con su ayuda o en su beneficio, la persona de existencia ideal será sancionada con una multa de hasta diez veces el monto de la suma comprometida. La multa se hará efectiva solidariamente sobre el patrimonio de la persona de existencia ideal y sobre el de las personas físicas que hubieren participado en la comisión del hecho punible.

Art. 3º — Incorpórase a la ley 23.737 como artículo 25 ter el siguiente:

Artículo 25 ter: El tribunal dispondrá las medidas procesales necesarias para asegurar los bienes o sus sustitutos y las ganancias presumiblemente derivadas de los hechos descritos en la presente ley. Durante el proceso el interesado podrá probar su legítimo origen, su falta de conocimiento sobre la procedencia ilícita y que realizó todo lo razonablemente posible para verificar el origen de los mismos. En este caso el tribunal ordenará la devolución de los bienes en el estado en que se encontraban al momento de su aseguramiento o en su defecto ordenar su indemnización. En caso contrario el tribunal dispondrá de las ganancias o bienes en la forma prescrita en el artículo 3º.

Art. 4º — Modifícase el artículo 26 de la ley 23.737 el que quedará redactado de la siguiente forma.

Artículo 26: En la investigación de los delitos previstos en esta ley no habrá reserva bancaria tributaria alguna. El levantamiento de la reserva sólo podrá ser ordenado por el juez de la causa.

La información obtenida y las actuaciones de los órganos encargados de las investigaciones estará limitada a las causas originadas en los hechos previstos en esta ley y no podrán dar lugar a procesos o sumarios administrativos. Las entidades financieras cambiarias o bursátiles estarán protegidas si colaboran en la investigación, estando obligadas a informar a la comisión creada por el decreto 1.849/90 toda operación sospechosa, denuncia por la que quedan liberadas de toda responsabilidad ulterior salvo en casos de temeridad o malicia.

*Julio C. Humada.*

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El fenómeno llamado globalización, con el desarrollo de las comunicaciones y la rapidez de las operaciones bancarias, hace posibles métodos cada vez más sofisticados de lavado de dinero proveniente del tráfico de estupefacientes, motivo de preocupación tanto en nuestra legislación como en el derecho comparado.

La naturaleza transnacional del delito descrito impone un verdadero desafío para los países civilizados, que no pueden albergar otros medios para enfrentarlo como no sea el de establecer una cooperación lisa y llana a nivel internacional.

Una idea del problema que representa el lavado de dinero fue dada a conocer por las Naciones Unidas, según la cual sólo el tráfico ilícito de estupefacientes mueve en el mundo alrededor de seis cientos mil millones de dólares, mientras que el resto de los delitos aporta el equivalente a un billón de dólares.

Por las razones expresadas, deberá prestarse suma atención a la evolución y desarrollo de esta materia, toda vez que nuestro país ofrece oportunidades realmente fructíferas para los inversores extranjeros, y esta misma razón puede, coincidentemente, atraer tanto a capitales genuinos como a otros que no lo son.

Tal es la gravedad que ha asumido la situación descrita a nivel mundial, que se ha considerado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas la posibilidad de crear una unidad de inteligencia especialmente dedicada al tratamiento de estupefacientes y delitos económicos internacionales, lo cual constituye un hecho sin precedentes en su largo historial.

De modo, entonces, que quienes operan desde la legalidad, no deberían subestimar el efecto distorsivo que estos circuitos financieros delictivos pueden producir en los movimientos de la economía ya que, como ha quedado demostrado, quienes se encuentran incurso en el lavado de dinero tienen por propósito establecer una suerte de telaraña en sus transacciones, sumamente compleja, procurando involucrar a tantas partes y jurisdicciones como sea posible.

Cabe suponer razonablemente, entonces, que por el carácter que reviste exige de un movimiento constante de fondos, requiriendo para lograr sus fines la intervención de entidades bancarias, compañías financieras, casas y agentes de cambio, *brokers*, compañías de inversión, transmisores de fondos, agentes de bolsa, etcétera, por citar tan sólo algunos a modo de ejemplo.

En orden a la necesaria participación de las entidades vinculadas a la actividad financiera y cambiaria en materia de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, cabe introducir la figura culposa dentro de la legislación vigente, atento a las especiales características de este ilícito y las dificultades en la obtención de pruebas fehacientes de modos dolosos de comisión, al como lo exige la actual legislación, de forma de dificultar y entorpecer sustancialmente esta actividad delictiva.

También por ello se introduce la responsabilidad de las personas jurídicas, en las condiciones establecidas en el artículo 25 bis. No ignoramos la clásica posición que afirma que las personas jurídicas no pueden cometer materialmente una infracción porque para ello necesita de intervención humana, pero la responsabilidad directa del ente será más eficaz que el sistema de responsabilidad pecuniaria indirecta del empleador.

Por otra parte, existen en nuestro país numerosas sanciones impuestas a personas de existencia ideal. A título de ejemplo se puede mencionar el artículo 8º de la ley 20.680, de abastecimiento; artículos 18 a 21 de la ley 22.802, de lealtad comercial, artículo 876 del Código Aduanero; artículos 26 y 42 de la ley 22.262, de defensa de la competencia, artículo 41 de la ley 21.526, de entidades financieras, entre otras.

Planteada así la situación, no ha de resultar extraño que en alguna medida se produzca el surgimiento de un conflicto de intereses entre las autoridades responsables de la lucha contra el lavado de dinero y la comunidad financiera, así como entre ésta y sus clientes.

Dicho conflicto se expresa en la contradicción existente entre la necesidad de obtener información que posibilite la identificación de los fondos, su inmovilización con miras a la eventual confiscación y el desmenoscaramiento de sus verdaderos titulares, por un lado, y la confidencialidad que deben guardar las entidades para con las operaciones que realicen con sus clientes, por otro.

El incremento de esta clase de maniobras delictivas, no obstante, ha logrado generar una fuerte tendencia a uniformar numerosas legislaciones, dentro de las cuales se considera que la confidencialidad debe ceder toda vez que sea investigado un delito de esa naturaleza.

Por ello es que, en razón del empleo múltiple de recursos y medios sofisticados de los que hacen uso quienes en última instancia resultan autores, la experiencia internacional es demostrativa de las grandes dificultades que debe afrontar una investigación que tenga por objeto esta clase de delitos, siendo por ello que el presente proyecto asigne una singular relevancia a todas aquellas personas que permitan ofrecer una colaboración que posibilite la identificación tanto de los bienes como de los responsables de las conductas incriminadas.

Más clara aún surge esa intención si se repara en que la norma específica está colocada a continuación del precepto que tipifica el lavado de dinero, es decir, el artículo 25, con el cual la confidencialidad financiera tiene una estrecha e íntima relación.

El presente proyecto que elevo a consideración de este Honorable Senado, establece la limitación en punto al uso de la información obtenida como consecuencia del levantamiento del secreto bancario. En consecuencia, si durante la instrucción de una causa por violación a la ley 23.737 se encontraren documentos o elementos probatorios de una conducta infractora distinta a la prevista, de conformidad con el proyecto que se acompaña, no sería posible hacer valer esas infracciones constituidas, por carecer de sustento jurídico.

Por lo demás, la reforma propuesta aspira a alcanzar una mayor complementación con la legislación vigente,

tendiendo a perfeccionamiento, ya que de su propio análisis surge un criterio de razonabilidad que las integra dentro del instituto del secreto bancario, evitando ponerlas en pugna con otras disposiciones.

A fin de armonizar disposiciones aparentemente encontradas, debe entenderse que las normas de la ley 23.737 referidas al levantamiento del secreto bancario que precluyen su alcance limitado a la investigación de conductas infraccionales por ella aprehendidas, actúan como modificatorias de disposiciones similares de normas anteriores, que no son específicas sino genéricas.

Por consiguiente, si la justicia recurre a funcionarios de otros órganos del Estado para la realización de investigaciones en el desarrollo de la causa, el conocimiento que los mismos adquieran de delitos o infracciones a otros regímenes no podrá ser utilizado fuera de la causa en que han sido llamados a colaborar y se encuentran relevados expresamente por el artículo 26 *in fine* de todo deber u obligación de tomar formalmente razón de los mismos.

Lo expuesto, la recta inteligencia propia del citado artículo 26, su separación legislativa de los casos genéricos, el marco especialísimo en el que se inscribe y las finalidades muy precisas del precepto comentado, obligan a su muy ciudadosa utilización para asegurar su eficacia.

En este sentido, no debería arriesgarse el empleo de un instrumento que puede llegar a ser de suma utilidad en la lucha contra el lavado de dinero para resolver, mediante su utilización, problemas que le son ajenos, de naturaleza distinta para los que fue proyectado, siendo que el Estado cuenta con otras posibilidades.

En mérito a lo expresado, solicito a los señores señadores la aprobación del presente proyecto de ley.

*Julio C. Humada.*

### III

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

#### LEY DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE BIENES, DINERO O INSTRUMENTOS MONETARIOS PROVENIENTES DE ILÍCITOS

##### TÍTULO I

##### Contenido y definiciones básicas

##### CAPÍTULO UNICO

Artículo 1º — La presente ley establece el régimen penal tendiente a reprimir el blanqueo de dinero, instrumentos monetarios, u otros bienes, provenientes de ilícitos; así como otras acciones tendientes a sustraer tales dineros, instrumentos, o bienes, a la acción de los órganos judiciales.

También dispone los procedimientos y crea los organismos tendientes a prevenir la comisión de los hechos precedentemente aludidos, así como a prestar apoyo técnico a las investigaciones relativas a los mismos.

Art. 2º — A los fines derivados de la presente ley, asignase a los términos detallados seguidamente, el siguiente significado:

*Blanqueo de dinero, instrumentos monetarios u otros bienes provenientes de ilícitos:* La acción de disimular, disfrazar, ocultar o enmascarar por cualquier medio, la condición de producto de un delito de dinero, instrumentos monetarios, u otros bienes.

*Organización criminal:* Grupo de personas organizadas con carácter permanente para cometer delitos, con el propósito fundamental de obtener lucro.

*Organización terrorista:* Grupo de personas organizadas con carácter permanente con la finalidad de obtener objetivos políticos a través del empleo, como medios fundamentales, de la violencia o la intimidación ilegales.

Agrégase a continuación del texto actual del artículo 78 del Código Penal, el siguiente párrafo:

A los fines de la aplicación de los artículos contenidos en el capítulo XIII bis, título XI, libro segundo de este Código, se entiende por:

*Blanqueo de dinero, instrumentos monetarios u otros bienes provenientes de ilícitos:* La acción de disimular, disfrazar, ocultar o enmascarar por cualquier medio, la condición de producto de un delito de dinero, instrumentos monetarios u otros bienes.

*Organización criminal:* Grupo de personas organizadas con carácter permanente para cometer delitos con el propósito fundamental de obtener lucro.

*Organización terrorista:* Grupo de personas organizadas con carácter permanente con la finalidad de obtener objetivos políticos a través del empleo, como medios fundamentales de la violencia o la intimidación ilegales.

### TÍTULO II

#### Del blanqueo de dinero, instrumentos monetarios o bienes provenientes de un delito, y delitos conexos

##### CAPÍTULO UNICO

Art. 3º — Incorporase a continuación del capítulo XIII, título XI, libro segundo del Código Penal, el siguiente capítulo, integrado por los artículos que a continuación se detallan:

##### CAPÍTULO XIII BIS

#### *Del blanqueo de dinero, instrumentos monetarios, y otros bienes*

Artículo 279 bis: Será reprimido con reclusión o prisión de uno a cinco años y multa del doble al quintuple del monto de las sumas comprendidas en la acción, así como inhabilitación absoluta por doble término al de la condena, si la acción no constituyera un delito más severamente penado, quien disimulare, disfrazare, ocultare o enmascarare por

cualquier medio, la condición de producto de un delito de dinero, instrumentos monetarios u otros bienes.

Con la misma pena establecida en el párrafo anterior e idéntica reserva, será reprimido quien recibiere, retuviere, poseyere, convirtiere, adquiriere, ocultare o invirtiere dinero o instrumentos monetarios, o adquiriere, utilizare, poseyere, ocultare, vendiere, permutare o realizare cualquier tipo de operación, con otros bienes; o transportare, transmitir, transfiriere, o enviare dinero, instrumentos monetarios u otros bienes, sabiendo, o debiendo saber conforme a las circunstancias, que provenían de la comisión de un delito.

La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión, cuando el dinero, instrumentos monetarios o bienes, provinieran de delitos:

1. Previstos en la legislación penal sobre estupefacientes.
2. Relacionados con el tráfico de seres humanos, o de órganos.
3. Vinculados con el contrabando de armas o explosivos.
4. De traición (artículos 214, 215 y 218 del Código Penal), o de espionaje (artículo 222, Código Penal).
5. Los delitos contra la administración pública contemplados en el artículo 174 inciso 5, o bien incluidos en los capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X del título XI, libro segundo, del Código Penal de la Nación.
6. Los delitos contemplados en los artículos 168, 169 y 170 del Código Penal.

Artículo 279 ter: Se impondrá la pena de cinco a quince años de reclusión o prisión, así como multa del doble al quintuple de la suma correspondiente al delito, e inhabilitación absoluta por doble término al de la condena, si no constituyera delito más severamente penado, por la comisión de las acciones previstas en el artículo anterior, en los siguientes casos:

- 1º Cuando las aludidas acciones fueran cometidas de modo habitual.
- 2º Cuando fueran realizadas con motivo del ejercicio de una actividad profesional.
- 3º Cuando fueran realizadas por una organización criminal o terrorista.
- 4º Cuando el imputado fuera funcionario público, y hubiera realizado la acción con motivo o en ocasión del desempeño de su cargo.

Artículo 279 quater: Quien por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, diera lugar a la comisión de cualquiera de las acciones previstas en el presente capítulo, sufrirá prisión de seis meses a cuatro años.

Artículo 279 quinquies: Los miembros de los órganos de dirección, administración y control de aquellas personas jurídicas que hubieran realizado cualquiera de las acciones previstas en los artículos precedentes; y que hubieran intervenido personalmente en la concepción, adopción o ejecución de las decisiones respectivas, sufrirán las penas para ellas previstas.

También serán punibles por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, en el supuesto en que con motivo del desempeño\* de sus cargos o de cualquier modo, dieran culposamente lugar a la comisión de las acciones en cuestión.

Artículo 279 sexies: En todos los delitos previstos en el presente capítulo, se aplicará el comiso del dinero, instrumentos monetarios, u otros bienes comprendidos en el mismo.

Art. 4º — Sustitúyese el texto actual del artículo 277 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 277: Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, si no constituyera delito más severamente penado, el que, sin promesa anterior al delito, cometiere después de su ejecución, alguno de los hechos siguientes:

1. Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta, u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo.
2. Procurare o ayudare a alguien a procurar la desaparición, ocultamiento o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del delito.

Art. 5º — Derógase el artículo 278 del Código Penal.

### TITULO III

Del ente destinado a colaborar en la prevención e investigación del delito, y de las obligaciones impuestas a particulares con dichas finalidades

#### CAPÍTULO I

*Del Centro de Prevención y Apoyo Técnico para Investigaciones Financieras (CETFIN)*

Art. 6º — Créase, en jurisdicción del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, el Centro de Prevención y Apoyo Técnico para Investigaciones Financieras (CETFIN).

Constituirá un ente autárquico.

Tendrá por misión la fiscalización y el control de las transacciones financieras y patrimoniales de toda índole, realizadas por personas físicas o jurídicas domiciliadas o residente: transitoria o permanentemente en el país o que se hallaren en tránsito en el mismo; ya sea en el país, o destinadas a ejecutarse o a producir efectos en él, con la exclusiva finalidad de detectar la

posible comisión de delitos contemplados en la presente ley; y la propuesta de las políticas tendientes a la prevención y represión eficaces de los mismos.

Serán sus atribuciones:

- a) Examinar las declaraciones que deberán serle remitidas, conforme establece la presente ley, y correlacionar las mismas con los restantes datos que obren en su poder;
- b) Requerir a todas las personas y entidades obligadas a brindar informes conforme establece la presente, toda la información que le sea necesaria, la que deberá serle suministrada, no rigiendo a su respecto el secreto bancario;
- c) Requerir a cualquier entidad pública o privada los informes que le sean necesarios, los que deberán serle suministrados; no rigiendo a su respecto el secreto impositivo, ni el secreto bancario;
- d) Disponer la suspensión, por el término de veinticuatro (24) horas, de la realización de cualquier operación financiera o de cualquier inscripción registral; requiriendo la prolongación de esta medida, resolución del órgano judicial competente;
- e) Poner en conocimiento del Ministerio Público cualquier hecho o circunstancia que permita sospechar la comisión pasada, actual o futura de un delito contemplado en la presente ley, remitiéndole los indicios, pruebas, estudios, análisis y todo elemento útil que obrare en su poder, para la promoción por parte de éste de la acción penal, si correspondiere;
- f) Recibir denuncias relativas a cualquiera de los delitos o contravenciones previstos en la presente ley, e investigarlas dentro de los límites de su competencia;
- g) Supervisar los procedimientos y órganos de control interno y de comunicación establecidos por las empresas o entidades sujetas a obligaciones derivadas de la presente ley, tendientes a prevenir y a impedir la realización de operaciones constitutivas de delitos previstos en la presente ley;
- h) Realizar las pericias que fueran necesarias, ya fuera con su propio personal, o requiriendo la colaboración de cualquier otro órgano de la administración pública, o bien de las universidades, pudiendo contratar, de ser necesario, consultores privados;
- i) Elaborar en forma anual un informe acerca del cumplimiento de su misión, el que será puesto en conocimiento de las comisiones con competencia en materia de seguridad interior y de tráfico de drogas de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, así como de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organos y Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia;
- j) Proponer las políticas más eficaces para la prevención y la represión de los delitos previstos en la presente ley.

El centro no está facultado para tomar declaraciones de ninguna naturaleza, ni para realizar ni solicitar la realización de medidas diversas a las precedentemente referidas, excepción hecha del acopio, clasificación y explotación de información de fuentes públicas.

Su actuación no excluye la que corresponde al Banco Central de la República Argentina, Ministerio Público, Administración Federal de Ingresos Públicos (Impositiva y Aduana), instituciones policiales, fuerzas de seguridad, y Secretaría de Seguridad Interior, en las competencias que les son propias.

Tales entes y organismos intercambiarán constantemente información con el CETFIN, prestándose recíproca colaboración en las investigaciones que emprendieren sobre aspectos regidos por la presente ley.

Art. 7º — El CETFIN estará presidido por un director general, designado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Congreso de la Nación, por resolución conjunta de ambas Cámaras, y que durará cinco años en sus funciones, no pudiendo ser designado para un nuevo período.

La designación deberá recaer en un profesional del derecho o de ciencias económicas, no menor de treinta y cinco años de edad y con un mínimo de diez años de ejercicio profesional, y con antecedentes académicos o de experiencia funcional, en materia de lucha contra el lavado de dinero.

El director general ejercerá la representación legal del CETFIN; y tendrá a su cargo el gobierno y la administración del ente.

Contará además con un cuerpo de funcionarios permanentes, profesionalmente especializados en materias económicas o jurídicas, así como en sistemas informáticos, designado por concurso público de antecedentes y oposición, organizado por el CETFIN, que no podrá ser superior a cuarenta (40) personas, así como con el personal auxiliar que sea necesario para su funcionamiento.

Dicho personal tendrá carácter de personal de planta permanente, en los términos del régimen jurídico básico de la función pública aprobado por ley 22.140.

Su tarea requerirá dedicación exclusiva, siendo incompatible con toda otra actividad incluida la docencia.

Todo el personal del CETFIN, ya fuera permanente, contratado, transitorio, o adscripto, estará especialmente obligado a guardar el más absoluto secreto respecto de toda información obtenida a través de su cargo, relacionada con éste.

Art. 8º — El CETFIN procederá a adscribir por períodos anuales, a personal de los siguientes organismos:

Banco Central de la República Argentina.

Ministerio de Economía.

Administración Federal de Ingresos Públicos (Impositiva y Aduana).

Ministerio de Justicia.

Policía Federal Argentina.

Gendarmería Nacional Argentina.

Prefectura Naval Argentina.

El personal adscripto deberá haber obtenido la máxima calificación prevista en el ordenamiento jurídico que regla su desempeño, en las dos últimas oportunidades en las cuales fue calificado.

Su adscripción se producirá de común acuerdo y por resolución conjunta del titular del organismo correspondiente, y del director del CETFIN.

Podrá ser prorrogada por períodos anuales, hasta un máximo de cinco (5) años.

El personal adscripto percibirá, además de los haberes por todo concepto correspondientes a su categoría o grado, un adicional cuyo monto determinará la reglamentación.

Art. 9º — El CETFIN podrá actuar, tanto en el ámbito del derecho público como en el correspondiente al derecho privado, incluyendo la actuación en juicio como actor o demandado.

Su patrimonio estará formado por las asignaciones presupuestarias que le sean efectuadas, así como por la participación que obtenga de las multas y comisos que sean efectuados como consecuencia de la aplicación de la presente ley y que corresponda conforme a la misma, así como por las donaciones y legados que reciba.

Art. 10. — Sin perjuicio de la obligación de denuncia propia de todo funcionario público, establécese que todo funcionario público que descubra hechos que puedan constituir indicio o prueba de la comisión actual, pasada o futura de los delitos previstos en la presente ley, deberá informar al CETFIN, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haber tomado conocimiento del hecho.

Quien incumpliere esta obligación sin causa justificada, sufrirá la pena contemplada en el Código Penal para la omisión de denuncia.

Si concurriere con el delito de omisión de denuncia, el mínimo y el máximo de la pena prevista para este delito se elevarán un tercio.

Art. 11. — Las sumas provenientes de las multas y del comiso contemplado en la presente ley, serán distribuidas por el Ministerio del Interior entre el CETFIN, los entes públicos, y las instituciones policiales y fuerzas de seguridad que hubieran tenido un rol significativo en la averiguación e investigación del delito.

Dichas sumas tendrán como destino fundamental el perfeccionamiento técnico y equipamiento de las instituciones respectivas, para la lucha contra los delitos contemplados en la presente ley.

Art. 12. — El CETFIN establecerá una relación constante de cooperación e intercambio de información con los organismos de otros países que ejerzan funciones análogas. En su defecto, dicha cooperación se establecerá con los bancos centrales y con los organismos con competencia en materia de lucha contra el tráfico ilícito de narcóticos.

Se asignará prioridad a las relaciones en la materia que pudieran establecerse con los países limítrofes de la Argentina.

El intercambio de información será llevado a cabo de conformidad con las normas establecidas en los tra-

tados y convenciones internacionales vigentes o, en su caso, al principio general de reciprocidad, así como al cumplimiento por parte del país o países con los que se establezca en el intercambio, de similares recaudos en materia de secreto o reserva, a los vigentes en la Argentina.

## CAPÍTULO II

### *De las obligaciones impuestas a personas físicas y jurídicas, con la finalidad de prevenir y de facilitar la investigación de los delitos previstos en la presente ley*

Art. 13. — Las personas físicas y jurídicas comprendidas en el presente artículo, quedarán sujetas a las obligaciones establecidas en esta ley con la finalidad de prevenir y de facilitar la investigación de los delitos previstos en la misma.

- a) Los bancos y entidades financieras, incluyendo las personas físicas o jurídicas que ejerzan en el país la representación de bancos o entidades financieras extranjeras;
- b) Las casas y agentes de cambio y, en general todas las personas físicas o jurídicas facultadas para cambiar moneda, ejerzan o no tal actividad en forma habitual;
- c) Las compañías de seguros, reaseguros, capitalización y ahorro, y ahorro para fines determinados;
- d) Los agentes de Bolsa y de Valores, las administradoras y gestoras de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen en bolsa;
- e) Las sociedades emisoras o gestoras de tarjetas de crédito o débito;
- f) Las personas físicas o jurídicas que posean o gestionen casinos de juego;
- g) Las inmobiliarias;
- h) Los escribanos públicos;
- i) Las casas de numismática, filatelia y de joyería, así como las personas o establecimientos que se dedican a la exportación, importación e industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas;
- j) Los casinos y casas de juego por dinero;
- k) Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postale;
- l) Las empresas dedicadas al transporte de cargas y mercaderías, así como al transporte de caudales;
- m) Toda otra actividad que, atendiendo a la utilización habitual de billetes u otros instrumentos al portador como medio de cobro, al alto valor unitario de los objetos o servicios ofrecidos, al lugar de ubicación de los establecimientos,

u otras circunstancias relevantes a la materia de la presente ley, se establezca reglamentariamente.

Art. 14. — Los obligados conforme al artículo precedente, deberán:

- a) Identificar a sus clientes en el momento en que manifiesten su propósito de realizar cualquier tipo de operación con ellas, que excediera de la suma de diez mil pesos, ya fuera en una operación, o en varias, cuando resultara evidente el fraccionamiento en varias, para eludir tal requisito;

Cuando existan indicios o certeza que los clientes o personas obligados a identificarse no actúan por cuenta propia, las personas físicas o jurídicas indicadas en el artículo precedente les requerirán la información necesaria para establecer la identidad de las personas por cuya cuenta actúan;

- b) Examinar atentamente cualquier operación, con independencia de su cuantía, que por su naturaleza o por las circunstancias en las que tuvo lugar, pueda estar vinculada a la materia de la presente ley;
- c) Conservar durante un período mínimo de diez años, los documentos que acrediten adecuadamente la realización de las operaciones y la identidad de los sujetos que las hubieran efectuado;
- d) Comunicar al CETFIN, cualquier hecho u operación, respecto del que existan sospechas o indicios que lo vinculen con los delitos que constituyen materia de la presente ley, particularmente en razón de su magnitud, falta de habitualidad, velocidad de rotación, complejidad inusitada o injustificada, aparente carencia de justificación económica o de cualquier otro motivo;
- e) Facilitar al CETFIN toda información que fuera requerida por éste, en ejercicio de sus competencias;
- f) Guardar estricta reserva, tanto con sus clientes como con terceros, respecto de la circunstancia de haber remitido información al CETFIN, como de habérselos requerido información por parte de éste, o de la circunstancia de estar realizando dicho organismo investigaciones de cualquier naturaleza;
- g) Requerir a las personas y entidades obligadas, el establecimiento de procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación, a fin de prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con las cuestiones que constituyen materia de esta ley;
- h) Dar inmediato cumplimiento a toda orden de suspensión de operaciones que les fuera impartida por el CETFIN, dentro de la competencia de este organismo.

### CAPÍTULO III

#### De las contravenciones

Art. 15. — El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo precedente por parte de los sujetos a las mismas, dará lugar a la aplicación de las sanciones administrativas previstas en este artículo, siempre que tal incumplimiento no integre las acciones constitutivas de los delitos previstos en la presente ley.

Será reprimido con multa de un mil pesos (\$ 1.000) a cinco millones de pesos (\$ 5.000.000), quien incumpliere las obligaciones establecidas en los apartados a), b), c) y g).

Será reprimido con multa de cinco mil pesos (\$ 5.000) a quince millones de pesos (\$ 15.000.000):

- I. El incumplimiento de la obligación de comunicar hechos u operaciones sospechosas, previsto en el inciso d).
- II. El incumplimiento de la obligación de suministrar al CETFIN la información requerida por éste.
- III. El incumplimiento de la obligación de reserva, prevista en el apartado f) del artículo precedente.
- IV. El incumplimiento a la orden de suspensión de operaciones que le fuera impartida por el CETFIN, prevista en el apartado h).

Art. 16. — En el supuesto en que el sancionado fuera una persona jurídica, además de la sanción que corresponda imponer a la entidad obligada, se impondrán a quienes ejercieran cargos en los órganos de dirección, administración o control de la misma y que intervinieran o fueran responsables de la acción u omisión respectiva, siempre que éstas no constituyeran delitos contemplados en la presente ley, multas de un mil pesos (\$ 1.000) a un millón de pesos (\$ 1.000.000), así como separación de sus cargos e inhabilitación para el ejercicio de cargos de dirección, administración o control de cualquiera de las entidades previstas en la presente ley, por el término de dos meses a cinco años.

Art. 17. — Para la graduación de la sanción, se tomarán en cuenta:

- a) Los montos comprometidos en las operaciones;
- b) El lucro obtenido;
- c) La habitualidad en las conductas constitutivas de infracción;
- d) Los antecedentes de las personas involucradas, especialmente la reincidencia o anterior comisión de delitos que involucraran al sistema financiero, o bien de tráfico de drogas, o de terrorismo;
- e) La conducta posterior a la comisión de la infracción y particularmente la realización de actos concretos tendientes a reparar los daños cometidos o de cooperación con las investigaciones,

Las penas que se impusieren a las personas comprendidas en el artículo 13 se graduarán teniendo en cuenta:

- a) La jerarquía del cargo que ostentara el imputado en la entidad;
- b) El grado de participación del mismo, en las acciones u omisiones constitutivas de la infracción, así como el dolo con que hubiera actuado;
- c) La capacidad económica del imputado;
- d) La conducta anterior del interesado, en relación con los requerimientos establecidos en esta ley;
- e) La conducta posterior a la comisión de la infracción y particularmente la realización de actos concretos tendientes a reparar los daños cometidos o de cooperación con las investigaciones.

Art. 18. — Las personas y entidades sujetas a las obligaciones establecidas en el artículo 14 quedan exentas de sus obligaciones relativas a secreto bancario, por las comunicaciones que efectúen al CETFIN.

Art. 19. — Las personas jurídicas cuyos órganos competentes, con motivo o en ocasión de sus funciones, realizaran o participaran en los delitos previstos en el título II de la presente, sufrirán la pena de multa prevista para las mismas, y serán además pasibles del retiro de la personería jurídica y autorización legal para funcionar en su actividad, por un período de dos meses a cinco años, o bien en forma definitiva.

#### CAPÍTULO IV

*De la investigación de las contravenciones, y los recursos existentes contra la resolución respectiva*

Art. 20. — La investigación de las contravenciones previstas en la presente ley, estará a cargo del Banco Central de la República Argentina.

Las mismas se iniciarán, ya sea por denuncia que ante el mismo realizara el CETFIN o cualquier otro ente u organismo competente al efecto, con el correlativo envío de las actuaciones correspondientes, o bien por propia iniciativa del Banco Central de la República Argentina.

En todo caso, se procederá a remitir al CETFIN copia de todos los elementos y antecedentes relativos a la causa. Será de aplicación el Reglamento de Investigaciones de la Administración Pública Nacional y, subsidiariamente, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y el Código de Procedimientos en Materia Penal.

Art. 21. — El Banco Central de la República Argentina, a los efectos de la averiguación de las infracciones aquí contempladas, estará facultado para:

- a) Citar y hacer comparecer testigos, con el auxilio de la fuerza pública de ser necesario;
- b) Realizar allanamientos y secuestros de todo tipo de pruebas.

Las medidas precedentemente señaladas, tendrán lugar por intermedio del Poder Judicial de la Nación.

Art. 22. — Las decisiones que adoptare el Banco Central de la República Argentina podrán ser impugnadas por el particular a través de recurso judicial, que deberá ser interpuesto y fundado ante el ente antes referido, dentro del término de treinta días de notificado el recurrente de la resolución respectiva.

Conocerá del recurso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a la que deberán ser elevadas las actuaciones dentro del quinto día de presentado el recurso.

Si con motivo de la sustanciación del sumario realizado el Banco Central de la República Argentina con relación a las contravenciones aquí analizadas se adviertiera la comisión de delitos, se procederá al envío de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal.

Concluida la causa penal respectiva, en su caso, se reanudarán las actuaciones administrativas, debiendo tenerse en cuenta en las mismas los hechos probados en el proceso penal.

Art. 23. — La prescripción de las contravenciones previstas en esta ley, así como de las sanciones impuestas, se producirá en el plazo de cinco años.

El término respectivo se computará desde la fecha de la comisión de la infracción.

En el supuesto de tratarse de una actividad continuada, la infracción procederá a computarse desde la realización del último acto constitutivo de infracción.

#### CAPÍTULO V

*De la elaboración de políticas para la lucha contra el blanqueo de dinero*

Art. 24. — Créase la Comisión de Políticas de Lucha contra el Blanqueo de Dinero proveniente del Narcotráfico (Copolan).

Tendrá por misión la elaboración de políticas relativas a la lucha contra los delitos previstos en la presente ley, la evaluación del resultado de la aplicación de las políticas vigentes, y la propuesta de medidas tendientes al perfeccionamiento de la lucha contra los delitos en cuestión.

Funcionará en jurisdicción del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.

Estará presidida por el presidente del Banco Central de la República Argentina, e integrada por un representante de la Secretaría de Seguridad Interior, un representante de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, un representante de la Secretaría de Hacienda, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El CETFIN constituirá órgano de trabajo de la Comisión.

#### TÍTULO IV

##### Disposiciones finales y transitorias

Art. 25. — Deróganse el artículo 25 de la ley 23.737, la ley 24.450 y el decreto 1.849/90, así como toda otra norma que se oponga a lo establecido en la presente ley.

Art. 26. — Dentro del término del treinta (30) días de la presente, el Poder Ejecutivo nacional procederá a efectuar la designación de Director General del CETFIN y a someter la misma al acuerdo del Congreso de la Nación, establecido en la presente.

Prestado que fuera el acuerdo, en su caso, facilitará al mismo todos los elementos necesarios para poner en funcionamiento el ente, en un plazo que no excederá los noventa (90) días de obtenido el acuerdo.

Art. 27. — Los fondos que requiera el cumplimiento de esta ley serán tomados de "Rentas generales" con imputación a la misma, hasta su inclusión en el próximo presupuesto de la administración nacional.

Art. 28. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Antonio T. Berhongaray.

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

### 1. El blanqueo de dinero

El blanqueo de dinero (España y Francia, entre otros), *money laundering* (literalmente, lavado de dinero, Estados Unidos de América, entre otros países), *legitimación de activos*, etcétera, constituye un fenómeno delictivo cuya creciente magnitud y reiteración constituye una verdadera amenaza para la seguridad pública y para la propia vigencia de las instituciones, en muchos países.

Consiste, fundamentalmente, en acciones tendientes a disimular, disfrazar, ocultar o enmascarar por cualquier medio, la condición de producto de un delito de dinero, instrumentos monetarios u otros bienes. También, en otras acciones tendientes, en definitiva, a asegurar a los autores y partícipes de un delito el provecho económico de su accionar, sustrayendo el dinero, instrumentos monetarios o bienes provenientes del mismo a la acción de la Justicia.

Ciertamente, no constituye un fenómeno nuevo.

Aún antes de la sanción de la ley 23.737 —régimen penal de estupefacientes— nuestra legislación penal preveía como variantes del encubrimiento, el denominado favorecimiento real, contenido en los incisos 2º y 3º, que reprime con pena de prisión de seis meses a tres años, a quien, "sin prometer a anterior al delito, después de su ejecución... Procurar o ayudare a alguien a... asegurar el producto o el provecho del mismo..." (inciso 2º) "y adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos que sabía provenientes de un delito, o interviniera en su adquisición, recepción u ocultamiento, con fin de lucro. Si el autor hiciere de ello una actividad habitual la pena se elevará al doble" (inciso 3º).

También contemplaba, la aún vigente figura denominada recepción de cosa de procedencia sospechosa, en su artículo 278, que establece que: "El que, con fin de lucro, adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos de acuerdo con las circunstancias debía sospechar provenientes de un delito, será reprimido con prisión de tres meses a dos años. Si el autor hiciere de ello una actividad habitual, la pena se elevará al doble".

No obstante, los hechos hicieron progresivamente evidente la insuficiencia de estas previsiones, tanto por no describir suficientemente la variedad y complejidad de las maniobras constitutivas del blanqueo de dinero, como, fundamentalmente, por su pena relativamente leve, así como por la carencia de órganos especializados que cooperaran en su investigación.

Fue así que ante la creciente magnitud asumida por el narcotráfico y una de sus derivaciones más perniciosas, el blanqueo de dinero, la ley 23.737, de régimen penal en materia de estupefacientes incluyó en su artículo 25, una norma estableciendo que "... será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de seis mil a quinientos mil australes, el que sin haber tomado parte ni cooperado en la ejecución de los hechos previstos en esta ley, interviniera en la inversión, venta, pignoración, transferencia o cesión de las ganancias, cosas o bienes provenientes de aquéllos, o del beneficio económico obtenido del delito siempre que hubiese conocido ese origen o lo hubiera sospechado.

Con la misma pena será reprimido el que comprare, guardare, ocultare o receptare dichas ganancias, cosas, bienes o beneficios conociendo su origen o habiéndolo sospechado.

A los fines de la aplicación de este artículo no importará que el hecho originante de las ganancias, cosas, bienes o beneficios se haya producido en el territorio extranjero.

El tribunal dispondrá las medidas procesales para asegurar las ganancias o bienes presumiblemente derivados de los hechos descritos en la presente ley. Durante el proceso el interesado podrá probar su legítimo origen en cuyo caso el tribunal ordenará la devolución de los bienes en el estado en que se encontraban al momento del aseguramiento o en su defecto ordenará su indemnización. En caso contrario el tribunal dispondrá de las ganancias o bienes en la forma prescrita en el artículo 39...".

Pronto pudo advertirse, no obstante, que a más de no prever la totalidad de acciones constitutivas del "blanqueo de dinero", la norma no comprendía otras formas delictivas constitutivas de peligros de gravedad análoga al narcotráfico, tal como sucede con el terrorismo, especialmente el terrorismo internacional, la trata de personas, el comercio de órganos, la corrupción administrativa, etcétera.

También resultaba necesario advertir la necesidad de contar con controles estrictos y específicos, particularmente de los movimientos financieros y, en general, patrimoniales.

En este último aspecto, la creación, por decreto 1.846 del 17-9-90, de la Comisión Mixta de Control de las Operatorias Relacionadas con el Lavado del Dinero de Narcotráfico, en el ámbito del Banco Central de la República Argentina constituyó un avance, si bien tibio e insuficiente.

Conforme dispuso el decreto mencionado, la expresada Comisión, presidida alternativamente cada seis meses por el presidente del Banco Central de la República Argentina y por el secretario de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, se integraba con represen-

tantes del Banco Central, de la Secretaría de Programación, de la Subsecretaría de Finanzas Públicas y de la Subsecretaría de Hacienda (dos representantes por cada organismo) (artículo 39).

Por otra parte, conforme dispuso el artículo 4º, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, prestaría la infraestructura de apoyo técnico y administrativo necesaria para el funcionamiento de dicha comisión.

Parece evidente, no obstante, que el modo elegido no resultaba el más apto para el logro del objetivo buscado.

Ciertamente que la presidencia alternada no constituía el modo mejor de obtener la unidad de conducción y concepción requerida por la difícil tarea impuesta.

Por otra parte, dicha tarea requería fundamentalmente una significativa especialización en materia económica y financiera, así como la fluida cooperación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad.

Su constitución, con el apoyo técnico y administrativo de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico no resultó, a nuestro juicio, acertada; debiendo haber sido el presidente del Banco Central, o mejor aún, un funcionario designado al efecto, de relevantes condiciones personales y especializado en la materia, quien en todo momento presidiera dicho órgano, debiendo haber estado integrado el mismo por funcionarios permanentes de trayectoria y conocimientos en la materia, funcionarios del área económico-financiera (Banco Central, Aduana, Dirección General Impositiva, Secretaría de Hacienda, etcétera), e integrantes adscritos de los cuerpos policiales y de seguridad.

## 2. La acción internacional en materia de blanqueo de dinero

Conviene destacar asimismo que la preocupación sobre el blanqueo de dinero en nuestro país acompañó a un fuerte movimiento internacional en esta materia.

Dada la naturaleza del blanqueo de dinero y su íntima vinculación con los movimientos de capitales que caracterizan a la época actual, resulta de fundamental importancia la cooperación internacional en la materia.

Cabe recordar en este aspecto la actuación, en el seno de la Organización de Estados Americanos, de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).

La misma fue establecida bajo el Programa Interamericano de Acción de Río de Janeiro contra el Uso Ilícito, la Producción y el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, aprobado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1986, y habría de desempeñar un rol de importancia en la lucha contra el blanqueo de dinero en el ámbito regional.

En la materia que nos ocupa, resultó de fundamental importancia la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito en drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas, suscrita en Viena el 19 de diciembre de 1988 y ratificada por nuestro país el 11 de marzo de 1992, a través de la ley 24.072 (Boletín Oficial 14-4-92).

Entre otros aspectos de la lucha contra el narcotráfico, la expresada Convención estableció normas en materia de cooperación internacional para posibilitar la confiscación del producto de delito de narcotráfico y delitos conexos y, consiguientemente, previó la adopción por los signatarios de las medidas necesarias para identificar, rastrear, y congelar o secuestrar dinero, instrumentos monetarios u otros bienes derivados de los delitos en cuestión, para su eventual confiscación.

Particularmente, se estableció a los efectos indicados la supresión del secreto bancario, la posibilidad para la justicia de un Estado con jurisdicción en materia de un delito determinado de narcotráfico, de solicitar la captura del producido de dicho delito que se hallara en otro Estado, y obtener colaboración de éste para su detección, rastreo, identificación y posterior congelamiento a los fines de su captura.

También contempló acuerdos entre partes relativos al empleo de los fondos o bienes confiscados, o parte de ellos, para organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra el narcotráfico; así como a la participación entre los países participantes en la investigación del delito y en la captura de su producto, de los bienes o fondos respectivos.

También se propuso la consideración por las partes signatarias, de la inversión de la carga de la prueba respecto del origen legítimo del producto o de otra propiedad sujeta a confiscación, en la medida en que ello resultare coherente con los principios de la legislación de cada país, así como con la naturaleza de los procedimientos judiciales y administrativos.

A partir de 1989, comenzó a advertirse un significativo incremento en la cooperación internacional en materia de prevención y represión del blanqueo de dinero, especialmente el proveniente del narcotráfico.

Aun países orgullosos de sus sistemas bancarios y celosos custodios del secreto respectivo, acordaron modificar esa posición, para permitir la adecuada investigación de este delito.

Como otro hito importante, debe citarse a la Financial Action Task Force (Fuerza de Tareas de Acción Financiera).

El presidente norteamericano George Bush propuso en las Cumbres Económicas de 1989 y 1990, constituir una Fuerza de Tareas de Acción Financiera formada por los países que constituyen los más importantes centros financieros del mundo, con miras al establecimiento de un consenso global sobre acciones tanto legislativas como de regulación, a fin de cortar el flujo de dinero proveniente del narcotráfico, que tenía lugar a través de instituciones financieras bancarias y no bancarias.

Así, la Fuerza de Tareas de Acción Financiera I, autorizada por la Conferencia de 1989, produjo un informe muy útil, que efectuó 40 recomendaciones para acciones a adoptar por los países miembros.

Dicha organización, integrada por Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelandia, Noruega, Portugal, Singapur, España, Suecia, Suiza, Turquía, Gran Bre-

taña y Estados Unidos de América, así como por el Consejo de Europa y el Consejo de Cooperación del Golfo, recomendó, entre otros aspectos, ratificar la Convención de Viena de 1988; evitar que el secreto bancario frustrara la implementación de las recomendaciones; estimular la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de dinero, incluyendo la extradición; establecer la responsabilidad penal de las empresas, no exclusivamente de los empleados de éstas; posibilitar la confiscación de la propiedad que se pretendiera blanquear, o de sus equivalentes; requerir que las instituciones financieras identificaran a sus clientes, y concluir con las cuentas anónimas o con nombres ficticios, así como que examinaran las transacciones sospechosas, informando de ellas a las autoridades; intercambiar información entre países, sobre el lavado de dinero, etcétera.

Un aspecto fundamental de las recomendaciones, fue el de proponer la extensión de la figura del blanqueo de dinero, hasta entonces limitada al narcotráfico, a otros delitos de cierta gravedad; debiendo cada país determinar qué delitos serían incluidos entre aquellos susceptibles de dar lugar a la aplicación de dicha figura.

El expreso pedido formulado por George Bush durante la Cumbre Económica de 1990 en Houston, dio lugar a la formación de la Fuerza de Tareas de Acción Financiera II.

Dicha "fuerza" procedió a monitorear el progreso por cada país participante en la implementación de las recomendaciones, proponiendo además recomendaciones adicionales.

El año 1990 fue de particular importancia, en lo relativo a la concepción e implementación de medidas de lucha contra el "blanqueo de dinero".

Es posible citar, en dicho año, la concurrencia de opinión a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en febrero; el informe de la Fuerza de Tareas de Acción Financiera adoptado en abril, el informe de la Conferencia Caribeña sobre Lavado de Dinero proveniente del Narcotráfico que se reunió en junio, el informe del Consejo de Europa adoptado en septiembre, la entrada en vigencia de la antedicha Convención de 1988 de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas, el 11 de noviembre, la iniciación el 26 de noviembre del proyecto de la Organización de Estados Americanos para proyectar modelos de legislación nacional sobre lavado de dinero y decomiso de valores, y la redacción de la directiva de política de la Comunidad Europea, aprobada en 1991.

Conviene recordar especialmente la reunión del grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos que tuvo lugar en la semana del 26 de noviembre de 1990.

En dicha oportunidad, se desarrollaron conceptos básicos relevantes para desarrollar una estrategia conjunta para los países de la organización para encarar el lavado de dinero, en particular legislación contra dicho delito.

Se trabajó también en el desarrollo de un entendimiento común de la misión del grupo, analizándose el estado actual de la ley en áreas relacionadas con el lavado de dinero, comiso, secreto bancario, ética, y conceptos le-

gales básicos, proponiéndose un cuestionario al respecto, para ser respondido por los países miembros. Cada representante acordó responder a un cuestionario en detalle, para que el Secretariado de la Organización de Estados Americanos pudiera compilar un informe de estado.

Participaron la Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, México, Perú, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.

En lo relativo a la Directiva sobre Blanqueo, Búsqueda, Captura y Confiscación del producto de delitos, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 8 de septiembre, fue el resultado de un esfuerzo de tres años, realizado por los Comités Europeos en Problemas de Delitos, buscando complementar los términos de la Convención de Viena.

Sin embargo, a diferencia de dicha Convención, la Directiva del Consejo de Europa trascendió el ámbito de los narcóticos y procuró establecer la cooperación internacional para combatir todos los delitos que generan productos. Entre otros beneficios, este documento brindó a los Estados partes una significativa oportunidad para cooperar en investigaciones correspondientes a blanqueo de dinero de delitos no relacionados con narcóticos.

Así, en los fundamentos de la Directiva del Consejo de Europa del 10 de junio de 1991 se estableció que si bien "... la definición de 'blanqueo de dinero' es tomada de la adoptada de la Convención de Viena..." sin embargo, dado que el 'blanqueo de dinero' no ocurre solamente en relación al producto de delitos relacionados con drogas, sino también respecto del producto de otras actividades criminales (tales como crimen organizado y terrorismo), los Estados miembros deberían, dentro del sentido de su legislación, extender los efectos de la directiva para incluir los productos de tales actividades, en la extensión en que las mismas pueden resultar en blanqueo de dinero que justifique sanciones sobre tal base..."

Consiguientemente, la Directiva definió al "blanqueo de dinero" del siguiente modo:

"'Blanqueo de dinero': significa las siguientes conductas, cuando son cometidas intencionalmente:

"— La conversión o transferencia de bienes, sabiendo que tal propiedad es derivada de actividad criminal o de un acto de participación en tal actividad; con el propósito de ocultar o disfrazar el origen ilegítimo de bienes, o de ayudar a alguna persona que está involucrada en la comisión de tal actividad, para evadir las consecuencias legales de su acción.

"— El ocultamiento o disfraz de la verdadera naturaleza, fuente, localización, disposición, movimiento, derechos con respecto a la propiedad de bienes, sabiendo que tal propiedad está derivada de actividad criminal, o de un acto de participación en tal actividad.

"— La adquisición, posesión o uso de bienes, sabiendo, al momento de recibirlos, que tales bienes fueron derivados de actividad criminal o de un acto de participación en tal actividad.

— La participación en la asociación para cometer, tentativas de cometer y ayudar, facilitar o aconsejar la comisión de cualquiera de las acciones mencionadas en los párrafos precedentes.

— El conocimiento, la intención o el propósito requerido como un elemento de las actividades antes mencionadas, puede ser inferido de las circunstancias fácticas objetivas...".

Sobre el modelo establecido por la Directiva, los países europeos fueron sancionando su legislación en la materia.

Así, en Francia, las leyes 90-614 del 12 de julio de 1990, relativa a la participación de los organismos financieros en la lucha contra el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes; la ley 19.122 del 29 de enero de 1993, sobre prevención de la corrupción y transparencia de la vida económica y los procedimientos públicos; ley 96-392 del 13 de mayo de 1996, relativa a la lucha contra el blanqueo y el tráfico de estupefacientes, así como a la cooperación internacional en materia de incautación y confiscación de los productos de la delincuencia.

En Gran Bretaña merecen destacarse la *Drug Trafficking Offenses Act of 1986*, y la *Criminal Justice Act of 1993*.

En Italia, cabe recordar la ley del 19 de marzo de 1990, número 55, sobre "*Nuove disposizioni per la prevenzione dell'a delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*"; el decreto ley del 3 de mayo de 1991, número 143, sobre "*Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio*", entre otras.

En España, conviene destacar el Real Decreto del 20 de diciembre de 1991, número 1.816/1991, sobre transacciones económicas con el exterior; las reformas al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispuestas por la ley orgánica del 23 de diciembre de 1992, número 8/1992, así como la ley del 28 de diciembre de 1993, número 19/1993, sobre medidas de prevención del blanqueo de capitales.

En los Estados Unidos de América han sido sancionados diversos cuerpos normativos en la materia.

Así, el Código de los Estados Unidos de América contiene normas penales sobre "*lavado de instrumentos monetarios*" (apartado 1956); "*empeñamiento en transacciones sobre bienes derivados de una actividad ilegal específica*" (apartado 1957); normas contenidas en el título 12, parte 21 del Código de Regulaciones Federales, Bancos y actividad bancaria sobre "*Mecanismos y procedimientos mínimos de seguridad, informes sobre actividades sospechosas*", y "*Programa de cumplimiento del Acta sobre Secreto Bancario*"; entre otras muchas normas sobre seguridad bancaria, control de transferencia al exterior, etcétera.

La cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de dinero tiene actualmente diversas expresiones.

Cabe recordar: el trabajo del Grupo de Expertos de CICAD-OEA; las conferencias ministeriales interamericanas y sus trabajos en materia de blanqueo de dinero;

la actividad de la Comisión de Estupefacientes y la Comisión sobre Prevención del Crimen y Justicia Criminal de la Organización de las Naciones Unidas; etcétera.

### 3. El presente proyecto

La primera cuestión que plantea todo proyecto sobre la materia que nos ocupa, es la relativa a la *denominación de la actividad delictiva de que se trata*.

Existen variadas posibilidades, desde la traducción literal de la expresión estadounidense *money laundering* —lavado de dinero—, hasta "*blanqueo de dinero*" —legislación de diversos países, particularmente España y Francia.

Hubimos de desechar inicialmente la expresión "*legitimación de activos*", empleada frecuentemente en el ámbito internacional y por proyectos presentados en nuestro medio, por cuanto entendemos que los activos provenientes de un delito no se *legittiman* como consecuencia de la comisión de las acciones que se procuran reprimir a través de las normas existentes en esta materia. A lo sumo, existe una intención dirigida hacia la legitimación; pero ésta se ve frustrada, aun después de realizada la acción típica, en el supuesto de desubrirse y compróbarse el delito.

Por ello, y aún a riesgo de emplear una expresión más metafórica que estrictamente técnica, hemos optado por la expresión, adoptada fundamentalmente por España y Francia, de "*blanqueo de dinero*", que conceptúo preferible a su equivalente estadounidense "*lavado de dinero*".

Consideramos que la multiplicidad de acciones mediante las cuales puede ser cometido este delito excluye la posibilidad de caracterizarlas a través de una única expresión, diversa a las antes mencionadas, que de todos modos resultan suficientemente gráficas para el ciudadano común, a quien e-tán dirigidas las leyes, respecto de en qué consiste el delito que nos ocupa.

La caracterización de las acciones típicas ofrece otras dificultades.

Tras profunda meditación, hemos descartado la expresión francesa "*facilitar por cualquier medio la justificación engañosa de la procedencia de los bienes e ingresos del autor de un delito*" —que por su misma amplitud, no describe con claridad las acciones constitutivas del delito.

Hemos optado, siguiendo en lo fundamental las definiciones de la Convención de Viena y de la Directiva del Consejo de Europa, entre otras, por definir al blanqueo de dinero, instrumentos monetarios y otros bienes, como "*la acción de disimular, disfrazar, ocultar o enmascarar por cualquier medio, la condición de producto de un delito de dinero, instrumentos monetarios, u otros bienes*".

Más concretamente, la norma penal básica que se propone crear, establece que:

"Será reprimido con reclusión o prisión de uno a cinco años y multa del doble al quintuple del monto de las sumas comprendidas en la acción, así como inhabilitación por doble término al de la condena, si la acción no constituyera un delito más severamente penado, quien disimulare, disfrazare, ocultare, o enmas-

carare por cualquier medio, la condición de producto de un delito de dinero, instrumentos monetarios u otros bienes.

"Con la misma pena establecida en el párrafo anterior e idéntica reserva, será reprimido quien recibiere, retuviere, poseyere, convirtiere, adquiriere o invirtiere dinero, o instrumentos monetarios; o adquiriere, utilizare, poseyere, vendiere, permutare o realizare cualquier tipo de operación, con otros bienes; o transportare, transmitir, transfiere, o enviare dinero, instrumentos monetarios u otros bienes, sabiendo que provenían de la comisión de un delito."

Otra opción no sencilla, es la relativa a definir al blanqueo de dinero con idéntico que el mismo puede tener lugar respecto del producto de cualquier delito, o bien que sólo puede tener lugar respecto de determinados delitos (narcotráfico, terrorismo, determinados delitos contra la administración pública, tráfico de órganos, secuestro extorsivo, trata de personas, delitos cometidos por organizaciones criminales, etcétera).

Conviene aquí recordar que este delito fue previsto inicialmente por la legislación de diversos países del mundo, exclusivamente con relación al narcotráfico; como aún sucede en nuestro país.

Posteriormente, y como consecuencia de recomendaciones internacionales, como la formulada por el Consejo de Europa, se fue extendiendo a otros delitos e incluso, en algunas legislaciones, a todos.

Por nuestra parte, a diferencia de los proyectos presentados hasta el momento en la Cámara de Diputados (incluyendo los remitidos por el Poder Ejecutivo nacional) y algunas legislaciones como la española, hemos seguido el criterio del Código Penal francés, conforme a la reforma efectuada en fecha relativamente reciente (ley del 23 de mayo de 1996), en cuanto a establecer una figura básica de blanqueo, definida en relación al producto de cualquier delito y no de determinados delitos; y una figura agravada, caracterizada en relación al producto de determinados delitos, así como a agravantes de otra índole.

Así, como consecuencia de la ley 96-392 del 13 de mayo de 1996, se creó en el Código Penal francés el capítulo IV titulado "Del blanqueo", con dos secciones.

La primera comprende el blanqueo simple y el "blanqueo agravado".

El "blanqueo simple" es definido como "El blanqueo es el hecho de facilitar, por cualquier medio, la justificación falaz de la procedencia de los bienes o ingresos del autor de un crimen o un delito del que haya sacado un provecho directo o indirecto. Constituye también un blanqueo el hecho de coadyuvar a una operación de inversión, de disimulación o de conversión del producto directo o indirecto de un crimen y de un delito".

Las figuras agravadas comprenden tanto circunstancias en que ha sido cometido el delito, como la procedencia del dinero, bienes o efectos de determinados delitos.

Compartimos en tal sentido el argumento fundamental que justifica la reforma francesa, es decir, que los circuitos financieros fraudulentos, cualquiera sea el origen del fraude, están estrechamente mezclados y es difícil individualizarlos y aportar la prueba de sus orígenes específicos.

Consideramos, por otra parte, que constituye una tendencia en el mundo, la de ampliar progresivamente el espectro de delitos cuyos productos son abarcados por la figura del blanqueo de dinero.

Por otra parte, en el caso argentino, lo que en realidad se hace es caracterizar de modo más adecuado e incrementar las penas, de las ya previstas figuras del favorecimiento real y la recepción de cosas de procedencia sospechosa, aplicables a la totalidad de los delitos, a través de una figura básica de blanqueo de dinero.

En consecuencia, se propone establecer como figura básica, el blanqueo de dinero, instrumentos monetarios u otros bienes, disponiendo al respecto lo siguiente:

"Será reprimido con reclusión o prisión de uno a cinco años y multa del doble al quintuple del monto de las sumas comprendidas en la acción, así como inhabilitación absoluta por doble término al de la condena, si la acción no constituyera un delito más severamente penado, quien disimulare, disfrazare, ocultare o enmascarare por cualquier medio, la condición de producto de un delito de dinero, instrumentos monetarios u otros bienes.

"Con la misma pena establecida en el párrafo anterior e idéntica reserva, será reprimido quien recibiere, retuviere, poseyere, convirtiere, adquiriere, ocultare o invirtiere dinero, o instrumento; monetarios; o adquiriere, utilizare, poseyere, ocultare, vendiere, permutare, o realizare cualquier tipo de operación, con otros bienes; o transportare, transmitir, transfiere, o enviare dinero, instrumentos monetarios u otros bienes, sabiendo, o debiendo saber conforme a las circunstancias, que provenían de la comisión de un delito.

"La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión, cuando el dinero, instrumentos monetarios o bienes, provinieran de delitos: 1) previstos en la legislación penal sobre estupefacientes; 2) Cometidos por organizaciones criminales o terroristas; 3) Relacionados con el tráfico de seres humanos o de órganos; 4) Vinculados con el contrabando de armas o explosivos; 5) De traición (artículos 214, 215 y 218 del Código Penal) o de espionaje (artículo 222, Código Penal); 6) Los delitos contra la administración pública contemplados en el artículo 174 inciso 5, o bien incluidos en los capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X del título XI, libro segundo, del Código Penal de la Nación. 7) Los delitos contemplados en los artículos 168, 169 y 170 del Código Penal."

Artículo 279 ter: Se impondrá la pena de cinco a quince años de reclusión o prisión, así como multa del doble al quintuple de la suma correspondiente al delito, e inhabilitación absoluta por doble término al de la condena, si no constituyera delito más severamente penado, por la comisión de las acciones previstas en el artículo anterior, en los siguientes casos:

1º Cuando las aludidas acciones fueran cometidas de modo habitual.

2º Cuando fueran realizadas con motivo del ejercicio de una actividad profesional.

3º Cuando fueran realizadas por una organización criminal o terrorista.

4º Cuando el imputado fuera funcionario público, y hubiera realizado la acción con motivo o en ocasión del desempeño de su cargo.

Como puede advertirse, se define una figura básica y se establecen formas agravadas, relacionadas con la procedencia del dinero, bienes o efectos de determinados delitos de gran trascendencia social: narcotráfico, tráfico de seres humanos, de órganos, contrabando de armas o explosivos, traición y espionaje, así como con determinadas circunstancias, tales como: realización de las acciones típicas en forma habitual, o con motivo del ejercicio de una actividad profesional, o por parte de una organización criminal o terrorista, o bien por parte de un funcionario público, con motivo u ocasión del desempeño de su cargo.

Las figuras agravadas corresponden, en parte, a aquellas a las cuales está limitada en algunas legislaciones, como la española, y en los proyectos presentados en el Parlamento argentino.

Además de las figuras agravadas previstas respecto del dinero originado en distintos tipos de delitos, se contempla otro tipo de agravantes: los casos en que las acciones en cuestión fueran cometidas de modo habitual, cuando fueran realizadas con motivo de una actividad profesional, cuando fueran realizadas por una organización criminal o terrorista, y cuando el imputado fuera funcionario público, y hubiera realizado la acción con motivo o en ocasión del desempeño de su cargo.

No creemos excesiva la penalidad propuesta para esta agravante (reclusión de cinco a quince años, y multa del doble al quintuple de la suma correspondiente al delito). El U. S. Code prevé para la figura básica del *money laundering*, prisión de hasta veinte años, o multa, o ambas penas conjuntamente.

También se prevé una forma culposa: la relativa a quien por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo, da lugar a la comisión de la acción principal.

Como consecuencia de estas figuras, se propone suprimir del Código Penal las ya mencionadas figuras de favorecimiento real y recepción de cosas de procedencia sospechosa.

Otro aspecto que conceptúo de interés, es el relativo al órgano técnico destinado a colaborar en la prevención e investigación del delito.

Constituye una política seguida en los países que han emprendido la lucha contra este delito, la creación de organismos técnicos especializados en investigación financiera.

A nuestro criterio, los entes en cuestión no deben constituir organismos de inteligencia, ni juntas de funcionarios de alto rango; ni estar integrado por agentes de inteligencia, en todo o en parte.

Nos parece que la denominación de "Unidades de Inteligencia Financiera" —Financial Intelligence Units— adoptada para este tipo de órganos en los Estados Unidos de América, es explicable por la tendencia de ese país a una noción muy amplia de la palabra "inteligencia", que lo lleva a incluir en la misma a actividades de investigación policial. Ello ha dado lugar a la inclusión en los proyectos sobre este tema elaborados por el Poder Ejecutivo nacional y por legisladores del oficialismo de la Secretaría de Inteligencia de Estado entre los componentes de estos órganos. Ello, a nuestro juicio, es totalmente inadecuado, máxime considerando la acentuada politización y falta de control de este organismo,

aspecto que ciertamente no promoverá la confianza en los destinatarios de la labor de estos órganos de investigación financiera, que son primariamente las entidades financieras.

Tampoco constituye la función de estos órganos, función, a nuestro criterio, la de constituir tribunales administrativos, ni órganos judiciales, ni ser dotados de facultades cuasijurisdiccionales.

Un organismo relativamente pequeño y de alta especialización, dedicado a la investigación financiera y patrimonial, que se limita a remitir al Ministerio Público los elementos que obtiene, cuando resulta necesario promover la acción penal, constituye a nuestro juicio un diseño adecuado. Un modelo relativamente similar, sumamente íntere ante a nuestro criterio, es el Tracfin francés.

Su función debe ser exclusivamente la investigativa, sobre la base de la información que le deben enviar las personas físicas y jurídicas a las que se asigna responsabilidad en tal sentido, la que obtenga a través de las denuncias que reciba, de las pericias que realice, de la explotación de la información pública que efectúe, y la que le sea suministrada por otros organismos públicos a través de la cooperación y recíproca coordinación de sus actividades.

Tampoco consideramos que el ente propuesto deba reunir la exclusividad en materia de investigaciones de lavado de dinero.

Estimamos, por el contrario, que el mismo debe intercambiar información y técnicas con otros organismos involucrados: Banco Central de la República Argentina, Administración Federal de Ingresos Públicos (Impositiva y Aduana), Ministerio Público, instituciones policiales y fuerzas de seguridad, y Ministerio del Interior.

Párrafo aparte merece la cuestión relativa a la composición del organismo.

Consideramos adecuado que esté formado por un número relativamente reducido de funcionarios permanentes de alta calificación, incorporados a través de concurso público de antecedentes y oposición, que sean profesionales en las áreas jurídica, económica e informática.

También, por personal adscripto por períodos anuales, de los organismos cuyo quehacer está directamente vinculado a los aspectos a investigar: Banco Central de la República Argentina, Ministerio de Economía, Administración Federal de Ingresos Públicos (Impositiva y Aduana), Ministerio de Justicia, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina.

Se propone que dicho personal se encuentre entre el mejor calificado de su organismo; y, a la vez, que reciba sobre sus haberes ordinarios un adicional, mientras permanezca en el expresado organismo investigativo.

Tales pautas habrán de facilitar que se envíe a los mejores funcionarios y no, como habitualmente sucede, que se remita a aquellos que resultan de menor utilidad en su organismo de origen.

También han sido establecidas en forma detallada obligaciones de identificación de clientes, brindar información relativa a transacciones sospechosas, conservación de documentos acreditativos de operaciones realizadas, guardar reserva respecto de la circunstancia de haber

facilitado información al órgano investigativo, establecimiento de procedimientos y órganos adecuados de control interno, etcétera.

Tales obligaciones han sido impuestas, entre otras actividades, a banco, entidades financieras, agentes de cambio y de bolsa, compañías de seguros, sociedades emisoras o gestoras de tarjetas de crédito o débito, así como a inmobiliarias, escribanos públicos, casinos y casas de juego, y a empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales.

Se faculta además al Poder Ejecutivo, para incluir toda otra actividad "...que, atendiendo a la utilización habitual de billetes u otros instrumentos al portador

como medio de cobro, al alto valor unitario de los objetos o servicios ofrecidos, al lugar de ubicación de los establecimientos, u otras circunstancias relevantes a la materia de la presente ley", resulte necesario hacerlo.

En definitiva, consideramos que este proyecto habrá de constituir un instrumento útil en la lucha contra el blanqueo de dinero, evitando a la vez la creación de organismos o el establecimiento de procedimientos que permitan la desnaturalización de este objetivo.

Por ello, presentamos este proyecto, para el que solicitamos el apoyo de nuestros pares.

*Antonio T. Berhongaray.*